



RECURSO DE REVISIÓN

EXPEDIENTE: IVAI-REV/2096/2022/I

SUJETO OBLIGADO: ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

COMISIONADA PONENTE: NALDY PATRICIA
RODRÍGUEZ LAGUNES

SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA: ABRIL
HERNÁNDEZ PENSADO

Xalapa-Enríquez, Veracruz a tres de junio de dos mil veintidós.

RESOLUCIÓN que **confirma** la respuesta otorgada por el sujeto Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz a la solicitud de información vía Plataforma Nacional de Transparencia registrada con el número de folio 300564100004222.

ÍNDICE

ANTECEDENTES.....1

CONSIDERANDOS2

PRIMERO. Competencia.3

SEGUNDO. Procedencia.....3

TERCERO. Estudio de fondo.3

CUARTO. Efectos del fallo.....23

PUNTOS RESOLUTIVOS.....24

ANTECEDENTES

1. Solicitud de acceso a la información pública. En fecha diez de marzo de dos mil veintidós, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, la parte recurrente presentó una solicitud de información ante el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, en la que requirió lo siguiente:

...
SE SOLICITA NUEVAMENTE LA INFORMACIÓN YA SOLICITADA Y QUE A LA FECHA NO AH SIDO ENTREGADA, POR DAR DATOS ERRONEOS PARA REALIZAR EL PAGO, EL FOLIO ASIGNADO A LA SOLICITUD ANTERIOR ES • No. de folio: 300564100001222.
LA INFORMACIÓN SOLICITADA ES LA SIGUIENTE:
Solicito la copia fiel de la contestación y solventacion entregada al órgano de fiscalización de las siguientes observaciones de las cuentas públicas, del Instituto Tecnológico Superior de Perote.
Cuenta Pública 2020
Observación Número: FP-051/2020/012
Observación Número: FP-051/2020/012
Observación Número: FP-051/2020/013
Cuenta Pública 2019
Observación Número: FP-042/2019/022
Observación Número: FP-042/2019/023

-INDICAR EL FUNDAMENTO LEGAL POR EL CUAL NO PUEDEN ENTREGAR LA INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA.
-INDICAR DIRECCIÓN Y HORARIO PARA RECOGER LA INFORMACION.
-SE ACUDIO A PAGAR A BANCOMER EN DICHO BANCO INDICARON QUE LOS DATOS PARA EL PAGO NO SON CORRECTOS, QUE FALTA EL NÚMERO DE CUENTA, CONVENIO, NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN QUE RECIBE EL PAGO.

9

...

2. Respuesta del sujeto obligado. El veinticinco de marzo del año en cita, el sujeto obligado, vía Sistema de Comunicación entre Organismos Garantes y Sujetos Obligados, registró respuesta a la solicitud de información.

3. Interposición del recurso de revisión. El cinco de abril de dos mil veintidós, la parte recurrente promovió recurso de revisión vía Sistema de Comunicación entre Organismos Garantes y Sujetos Obligados en contra de la respuesta a su solicitud de acceso a la información.

4. Turno del recurso de revisión. El mismo cinco de abril de la presente anualidad, la Presidencia de este Instituto tuvo por presentado el recurso y por cuestión de turno correspondió conocer a la Ponencia I, de conformidad con el artículo 87, fracción XVIII de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz.

5. Admisión del recurso. El diecinueve de abril de dos mil veintidós, se admitió el presente recurso de revisión, y se dejaron las constancias que integran el expediente a disposición de las partes para que en un plazo máximo de siete días, manifestaran lo que a su derecho conviniera.

6. Comparecencia del sujeto obligado. El cuatro de mayo de dos mil veintidós, se tuvieron por recibidos vía Sistema de Comunicación entre Organismos Garantes y Sujetos Obligados, los alegatos al recurso de revisión por parte del sujeto obligado, mediante oficio número OFS/8227/05/2022 y anexos, firmado por la Titular de la Unidad de Transparencia. La parte recurrente no compareció en el presente recurso.

7. Ampliación del plazo para resolver. En fecha seis de mayo del año que transcurre, el Pleno del Instituto acordó la ampliación del plazo para resolver el proyecto de resolución.

8. Requerimiento a la parte recurrente. El once de mayo de dos mil veintidós, se tuvo al sujeto obligado por desahogada la vista en el expediente en que se actúa; asimismo se efectuó requerimiento a la parte recurrente respecto de la comparecencia del sujeto obligado sin que lo cumplimentara, por lo que el presente asunto se resolverá con las constancias que obren en autos.

9. Cierre de instrucción. El tres de junio del año en curso, se declaró cerrada la instrucción, ordenándose formular el proyecto de resolución.

Seguido el procedimiento en todas sus fases, se presentó el proyecto de resolución conforme a los siguientes:

CONSIDERANDOS

Esto es así, porque se impugna la respuesta otorgada por un sujeto obligado a la solicitud de acceso a la información.

SEGUNDO. Procedencia. El recurso de revisión cumple con los requisitos formales y sustanciales previstos en los artículos 155, 156, 157 y 159 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y en el caso no se actualizan los supuestos de improcedencia o sobreseimiento a que se refieren los numerales 222 y 223 del ordenamiento legal invocado.

TERCERO. Estudio de fondo. Es importante aclarar que la parte recurrente solicitó conocer del sujeto obligado la información referente a la copia fiel de la contestación y solventación del Instituto Tecnológico Superior de Perote, entregadas al Órgano de fiscalización de las siguientes observaciones: de la cuenta pública del año 2020, las de números: FP-051/2020/012, FP-051/2020/012, FP-051/2020/013, y de la cuenta pública del año 2019, las observaciones números: FP-042/2019/022, FP-042/2019/023.

La persona inconforme narra en su agravio que dicha solicitud ya fue efectuada, pero en un diverso folio de número 300564100001222, y que la respuesta en aquél procedimiento de acceso otorgada por el sujeto obligado, fue en el sentido de proporcionar las copias solicitadas con el costo respectivo, sin embargo continúa manifestando la persona inconforme que, al acudir a realizar el pago en el Banco respectivo, le indicaron que los datos eran erróneos, por lo que la información que solicitó no le ha sido entregada.

La parte recurrente adjuntó el siguiente documento vía Sistema de Comunicación entre Organismos Garantes y Sujetos Obligados:

[illegible]

■ **Planteamiento del caso.**

Durante el procedimiento de acceso, el sujeto obligado por conducto de la Titular de la Unidad de Transparencia, vía Sistema de Comunicación entre Organismos Garantes y Sujetos Obligados, registró una respuesta a la solicitud de información, en la que precisó lo siguiente:

...

Resulta que el particular en la solicitud que nos ocupa pidió copias fieles tanto de las contestaciones como de las solventaciones que se entregaron a este Órgano de Fiscalización para atender las observaciones FP-042/2019/022 y FP-042/2019/023 señaladas en el informe de la Cuenta Pública 2019 y las diversas FP-051/2020/012 y FP-051/2020/013 señaladas en el informe de la Cuenta Pública 2020 del Instituto Tecnológico Superior de Perote.

En ambos informes se instruyó a este Organismo Constitucional Autónomo para que diera inicio a las investigaciones a que hubiera lugar respecto de las observaciones de presunto daño patrimonial que constituyen la probable comisión de faltas graves de conformidad con el Título Tercero Capítulos II, III y IV de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Para cumplir con lo anterior, por acuerdos del treinta de agosto de dos mil veintiuno y diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se iniciaron las investigaciones números ORFIS/UI/IF2020/024/2021 y ORFIS/SI/IR2019/021/2021, mismas que al momento en que se formuló la solicitud que nos ocupa se encuentran abiertas y que pueden determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la Ley General de Responsabilidades Administrativas señala como faltas administrativas de servidores y ex servidores públicos así como de particulares.

Es preciso señalar que la Unidad de Investigación, en su carácter de Autoridad Investigadora, debe atender los principios que rigen la investigación de responsabilidades administrativas y que se encuentran descritos en el artículo 90 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los cuales son: legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y respeto a los derechos humanos; a su vez es responsable de los criterios de oportunidad, exhaustividad y eficiencia en la investigación, la integridad de los datos y documentos, así como del resguardo del expediente en su conjunto.

Una vez concluida la investigación, la Unidad de Investigación estará en condiciones de emitir un acuerdo de conclusión y archivo o un informe de presunta responsabilidad administrativa, ya que así lo prevé el artículo 100 de la citada Ley General; es por ello que se actualiza la imposibilidad de entregar al solicitante la información requerida, pues de hacerlo se contravendrían los principios y criterios arriba mencionados, perjudicando los derechos humanos de los servidores o ex servidores públicos así como de los particulares sujetos a investigación, además de dar a conocer información sensible que podría causarles un daño en su esfera jurídica, ya que el atribuirles diversos señalamientos y acusaciones por la comisión de presuntas irregularidades administrativas, no implica necesariamente que sean responsables de las mismas, ello en atención a que el procedimiento de investigación no ha terminado.

De darse a conocer dicha información se estarían difundiendo investigaciones no concluidas y acciones que aún se encuentran en curso de investigación y por lo mismo podrían contener datos inexactos, incrementando la posibilidad de dañar la actuación de esa autoridad y el procedimiento mismo, ya que las informaciones y documentos que sustentan las observaciones FP-042/2019/022, FP-042/2019/023, FP-051/2020/012 y FP-051/2020/013 se encuentran integradas en los expedientes de investigación arriba mencionados, de tal manera que si algún servidor o ex servidor público resultare presunto responsable por la comisión de alguna falta administrativa grave, la Autoridad Investigadora estará en posibilidad de analizar si los particulares intervinieron en los actos que originaron esas conductas y en su caso, procederá a señalarlas como particulares vinculados con faltas administrativas graves.

Adicionalmente, se estaría difundiendo información de procesos que aún no han quedado firmes y podría provocar que las estrategias procesales que en su caso pudieran derivarse, fueran conocidas y la parte responsable imple

...

Aunado a lo anterior, adjunta lo siguiente:

1 / 12

80%

2 / 12

80%



Oficio OF-UT-080-03-2022
Asunto: Se surge respuesta a solicitud de información con número de folio 300584100004222

Xalapa de Enríquez, Ver., 25 de marzo de 2022

C. SOLICITANTE
PRESENTE

En atención a su solicitud de información registrada con número de folio 300584100004222, recibida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, y radicada en esta Unidad de Transparencia con el número de expediente UT/EXPS/USIA/042/03/2022; con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 1, 2, 3 fracciones II y XX, 4, 6, 7, 45 fracciones II y IV, 121, 125 y 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 134 fracciones II y III, 139, 141 y 145 de la Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 83, de la Ley Número 964 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 8 fracción IV, 30 y 31 fracciones I y VI del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (ORFIS), atentamente le comunico que:

PRIMERO.- De conformidad con lo ordenado por los artículos 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 4, 9 fracción VII, 132, 134 fracción II de la Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz tiene el carácter de sujeto obligado, por lo que su Unidad de Transparencia realizará los trámites internos que resulten necesarios para tramitar y entregar la información generada, administrada o en su posesión, ya que es un bien público y toda persona tiene derecho a obtenerla, con las excepciones que señala la Ley.

SEGUNDO.- Para efecto de garantizar el ejercicio de su derecho de acceso a la información, esta Unidad de Transparencia, con número de oficio ORFIS-UT-080-03-2022 (Anexo 1), turnó su solicitud a la Unidad de Investigación, área administrativa que otorgó la respuesta correspondiente, mediante memorándum UV06803/2022 (Anexo 2).

TERCERO.- En razón de la respuesta otorgada por el área responsable de la información, me permito informarle que el Comité de Transparencia de este Órgano Fiscalizador aprobó, en su Décima Sesión Extraordinaria, el Acuerdo CT-25-03-2022/CIR/04, referente a los documentos que conforman la contestación y solventación entregada al Órgano de Fiscalización Superior derivado de las observaciones a las cuentas públicas 2019 y 2020 del Instituto Tecnológico Superior de Perote, registradas de la siguiente manera: FP-042/2019/022, FP-042/2019/023, FP-051/2020/012 y FP-051/2020/013, respectivamente, que forman parte de las investigaciones a cargo de la Unidad de Investigación de este



Oficio OF-UT-080-03-2022
Asunto: Se surge respuesta a solicitud de información con número de folio 300584100004222

Órgano, identificadas con los números de expediente ORFIS/UT/2020/024/2021 y ORFIS/UT/2019/021/2021. El contenido del acta en comento, se pone a su disposición en la siguiente liga: <http://www.ofis.pob.mx/actas-extraordinarias-2022/>

Por lo anterior y en términos del artículo 145 fracción II de la Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se hace de su conocimiento que la información por usted solicitada se encuentra clasificada en modalidad reservada.

ATENTAMENTE

LC. VIOLETA CÁRDENAS VÁZQUEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

C.C. MRS. OLGA DOMÍNGUEZ CORDERO - Auditora General del ORFIS - Para su respectiva contestación

3 / 12

80%

4 / 12

80%



Oficio OF-UT-080-03-2022
Asunto: Se surge respuesta a solicitud de información

Xalapa-Enríquez, Ver., 10 de marzo de 2022

LC. MARÍA DE LOURDES DE LA LOZA GONZÁLEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
PRESENTE

En términos de los artículos 3 fracción XXXII, 132, 134 fracción II y 135 de la Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 30 y 31 fracción I del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, atentamente me permito turnar a usted la siguiente solicitud de información recibida mediante Plataforma Nacional de Transparencia, trámite que quedó registrada con el folio que se anexa:

UT/EXPS/USIA/042/03/2022:

SE SOLICITA NUEVAMENTE LA INFORMACIÓN YA SOLICITADA Y QUE A LA FECHA NO HA SIDO ENTREGADA, POR DAR DATOS ERRÓNEOS PARA REALIZAR EL FOLIO, EL FOLIO ASIGNADO A LA SOLICITUD ANTERIOR ES: folio de folio 300584100004222.

LA INFORMACIÓN SOLICITADA ES LA SIGUIENTE:

Señale la copia del de la contestación y solventación entregada al Órgano de Fiscalización de las siguientes observaciones de las cuentas públicas del Instituto Tecnológico Superior de Perote, Cuentas Públicas 2020

Observación Número: FP-051/2020/012

Observación Número: FP-051/2020/013

Cuentas Públicas 2019

Observación Número: FP-042/2019/022

Observación Número: FP-042/2019/023

LA PLATAFORMA

INDICAR DIRECCIÓN Y HORARIO PARA RECOGER LA INFORMACIÓN

SE ACORDÓ A PAGAR A BANCOS EN DICHO BANCO INDICARON QUE LOS DATOS PARA EL FOLIO NO SON CORRECTOS, QUE FALTA EL NÚMERO DE CUENTA, CONVENIO, NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN QUE RECIBE EL FOLIO.

En virtud de lo anterior, mucho agradeceré su atención para efecto de instruir a quien estime pertinente para responder y enviar lo requerido según el tipo de respuesta que otorgue, conforme a lo señalado en mi similar ORFIS-CIRCO-UT-001-01-2022, con la finalidad de notificar en tiempo y forma la respuesta correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LC. VIOLETA CÁRDENAS VÁZQUEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

C.C. MRS. OLGA DOMÍNGUEZ CORDERO - Auditora General del ORFIS - Para su respectiva contestación



México, D.F., 10/03/2022

Asunto: Se surge respuesta a solicitud de acceso a la información

Xalapa-Enríquez, Ver., 17 de marzo de 2022.

LC. VIOLETA CÁRDENAS VÁZQUEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 12 fracción V del Reglamento Interior de este Órgano Autónomo y en atención a su oficio ORFIS-UT-080-03-2022, del diez de marzo del año en curso, donde turnó a esta Unidad de Investigación la solicitud UT/EXPS/USIA/042/03/2022, me permito informarle que después de su análisis preliminar de la información y documentación solicitada por el particular, se considera que la misma debe ser clasificada como reservada ya que se encuentra lo dispuesto en el artículo 68, fracciones II, V, VI y VII de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por las siguientes razones:

1. Preliminares

- Esta Unidad de Investigación inició las investigaciones ORFIS/UT/2020/024/2021 y ORFIS/UT/2019/021/2021 derivadas de los informes de resultados de las Cuentas Públicas 2019 y 2020 del área fiscalizable Instituto Tecnológico Superior de Perote, turnándose un expediente para cada una.
- Mediante oficio AEFOPM-037/02/2022, del primero de febrero del año en curso, la Autoridad Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas indicó que la información digital soporte del presente dato patrimonial de las direcciones financieras y técnicas de los entes estatales por lo que hace a las Cuentas Públicas 2017, 2018, 2019 y 2020, incluido el que hoy nos ocupa, se encuentran disponibles en una sala de Internet de esta organización.
- La documentación solicitada por el particular en copia simple corresponde a la entregada en el oficio AEFOPM-037/02/2022, por lo tanto, está siendo objeto de análisis y valoración dentro de las investigaciones arriba referidas.
- Por lo anterior, esta unidad considera que dicha información debe clasificarse como reservada hasta por tres años, por las razones y causas siguientes:

2. Fundamentación

Artículos 100, 101, 108 fracción I y 113 fracciones IX, X y XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 88 fracción I, 89 fracciones V, VI y VII de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Costa, Cultura, Skyline, fracción I Octavo, Vigésimo noveno y Tricésimo de los Usos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, y demás relativos y aplicables.

3. Motivación

1. Publicadas en el Diario Oficial de la Federación en fecha, lugar de abril de dos mil dieciséis



Memorandum: U/09/03/2022

Asunto: Se atiende solicitud de acceso
UT/EXP/VS/SA/04/02/2022

Resulta que el particular en la solicitud que nos ocupa pidió copias fieles de tanto de las contestaciones como de las solventaciones que se entregaron a este órgano de fiscalización para atender las observaciones FP-042/2019/022 y FP-042/2019/023 señaladas en el informe de la Cuenta Pública 2019² y las diversas FP-051/2020/012 y FP-051/2020/013 señaladas en el informe de la Cuenta Pública 2020³ del Instituto Tecnológico Superior de Perote. En ambos informes se instruyó a este organismo constitucional autónomo para que diera inicio a las investigaciones a que hubiere lugar respecto de las observaciones de presunto daño patrimonial que constituyen la probable comisión de faltas graves de conformidad con el Título Tercero Capítulos II, III y IV de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Para cumplir con lo anterior, por acuerdos del treinta de agosto de dos mil veintiuno y diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se iniciaron las investigaciones número ORFIS/UVF/2020/024/2021 y ORFIS/VR/2019/021/2021, mismas que al momento en que se formuló la solicitud que nos ocupa se encuentran abiertas y que pueden determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la Ley General de Responsabilidades Administrativas señala como faltas administrativas de servidores y ex servidores públicos así como de particulares.

Es preciso señalar que la Unidad de Investigación, en su carácter de Autoridad Investigadora, debe atender los principios que rigen la investigación de responsabilidades administrativas y que se encuentran descritos en el artículo 90 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los cuales son: legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y respeto a los derechos humanos; a su vez es responsable de los criterios de oportunidad, exhaustividad y eficiencia en la investigación, la integridad de los datos y documentos, así como del resguardo del expediente en su conjunto.

Una vez concluida la investigación, la Unidad de Investigación estará en condiciones de emitir un acuerdo de conclusión y archivo o un informe de presunta responsabilidad administrativa, ya que así lo prevé el artículo 100 de la citada ley general; es por ello que se actualiza la imposibilidad de entregar al solicitante la información requerida, pues de hacerlo se contravenirían los principios y criterios arriba mencionados, perjudicando los derechos humanos de los servidores o ex servidores públicos así como de los particulares sujetos a investigación, además de dar a conocer información sensible que podría causarles un daño en su esfera jurídica, ya que el atribuirles diversos señalamientos y acusaciones por la comisión

² Informe publicado mediante Decreto número 862 del diecinueve de agosto del dos mil veintiuno en la Gaceta Oficial del Estado con número extraordinario 346, veintidós de agosto de dos mil veintiuno.

³ Informe publicado mediante Decreto número 101, del veintidós de octubre del dos mil veintiuno, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, con número extraordinario 424 del veintidós de octubre del año dos mil veintiuno.

Se otorga el acceso a la información solicitada en el presente expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 6º de la Ley General de Acceso a la Información Pública, en el sentido de que la información solicitada no es de carácter reservado, ni de carácter confidencial, ni de carácter secreto, por lo que se otorga el acceso a la información solicitada.



Memorandum: U/09/03/2022

Asunto: Se atiende solicitud de acceso
UT/EXP/VS/SA/04/02/2022

de presuntas irregularidades administrativas, no implica necesariamente que sean responsables de las mismas, ello en atención a que el procedimiento de investigación no ha terminado.

4. Prueba de dolo

4.1. Riesgo real

Debido a que no han concluido las investigaciones por parte de la Unidad de Investigación de este órgano autónomo, estas podrían verse afectadas por la intervención de elementos externos tales como exposición a medios de comunicación o a la intromisión de terceros que no forman parte de dichas investigaciones. En ese contexto, resulta fundamental insistir en que esta Unidad de Investigación se encuentre obligada en todo momento a garantizar el derecho al debido proceso de los ciudadanos que son sujetos a investigación, el cual se encuentra tutelado en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 4º de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ya que en caso de que se concluya que derivado de las diligencias de investigación existe responsabilidad administrativa imputable a los investigados, se emitirá el correspondiente Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y se turnará a la Autoridad Subordinadora a efecto de que inicie el procedimiento de responsabilidad correspondiente, es así que, como se ha dejado apuntado en líneas que anteceden, de publicarse la multitudinaria información se viciaría ese derecho fundamental que debe prevalecer en todo procedimiento incoado por cualquier autoridad en contra de cualquier persona. Sirve de apoyo a lo anterior el siguiente criterio establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Época X, Libro 3, Tomo I, febrero de 2014, página 395, el cual señala:

DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P.J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 123, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de oír y desahogar las pruebas en que se funda la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado conjuntamente con el elenco de garantías mínimas que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio,



Memorandum: U/09/03/2022

Asunto: Se atiende solicitud de acceso
UT/EXP/VS/SA/04/02/2022

fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consultor, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza.

Es de significarse que al revelar el nombre de las personas físicas investigadas se viciaría el principio de presunción de inocencia, el cual, como derecho fundamental de toda persona, resulta aplicable a los procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado, toda vez que la finalidad perseguida con la instauración de un procedimiento de investigación es descubrir si con la conducta desplegada por los servidores o ex servidores públicos se configuran faltas administrativas graves y si los particulares se encuentran vinculados con las mismas, ya que de ser el caso se determinaría a través de la autoridad competente la responsabilidad resarcitoria, y los sancionados tendrían, en su caso, que restituir a la hacienda pública y al patrimonio de los entes públicos el monto de los daños y perjuicios estimados en dinero que se hayan causado, esto con el fin de indemnizar el patrimonio del Instituto Tecnológico Superior de Perote.

En razón de lo anterior, es que se insiste que en este asunto se actualiza la imposibilidad para proporcionar la información solicitada por el peticionario, toda vez que se señalaría a una persona física o moral como vinculada a una falta administrativa grave, sin que exista certeza de ello, en virtud de que la Autoridad Investigadora se encuentra realizando diversas diligencias con la finalidad de allanarse de todos los elementos de convicción que le permitan conocer la verdad y estar en posibilidad de emitir el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.

Ahora bien, aun cuando el peticionario requiere copias fieles tanto de la contestación como de la solventación que se haya entregado a este Órgano de Fiscalización Superior que atiende las observaciones FP-042/2019/022, FP-042/2019/023, FP-051/2020/012 y FP-051/2020/013, es decir, como resultado del Procedimiento de Fiscalización Superior a las Cuentas Públicas 2019 y 2020 del Instituto Tecnológico Superior de Perote, en el que se determinó un probable daño patrimonial, es por ello que la conducta desplegada por los servidores o ex servidores públicos y particulares, podrían constituir faltas graves.

4.2. Riesgo demostrable

De darse a conocer dicha información se estaría difundiendo investigaciones no concluidas y acciones que aún se encuentran en curso de investigación y por lo mismo podrían contener datos inexactos, incrementando la posibilidad de



Memorandum: U/09/03/2022

Asunto: Se atiende solicitud de acceso
UT/EXP/VS/SA/04/02/2022

dañar la actuación de esa autoridad y el procedimiento mismo, ya que las informaciones y documentos que sustentan las observaciones FP-042/2019/022, FP-042/2019/023, FP-051/2020/012 y FP-051/2020/013 se encuentran integradas en los expedientes de investigación arriba mencionados, de tal manera que si algún servidor o ex servidor público resultara presunto responsable por la comisión de alguna falta administrativa grave, la Autoridad Investigadora estará en posibilidad de analizar si los particulares intervinieron en los actos que originaron esas conductas y en su caso, procederá a señalarlos como particulares vinculados con faltas administrativas graves.

Adicionalmente, se estaría difundiendo información de procesos que aún no han quedado firmes y podría provocar que las estrategias procesales que en su caso pudieran derivarse, fueran conocidas y la parte responsable implementara acciones y tácticas dilatorias u otras que pudieran provocar alguna convicción errónea en el evaluador o juzgador, además de que la información contenida no es concluyente y la misma puede ser modificada en cualquier momento a la luz de las diligencias de investigación que en su caso sean desahogadas posterior a la entrega de la información solicitada.

4.3. Riesgo identificable

La divulgación de la información podría alterar los resultados de las actividades de seguimiento de las acciones emitidas con base en las diligencias de investigación desahogadas, poniendo a disposición del público en general datos sensibles que afectarían las tareas de revisión y evaluación de la conducta de los ciudadanos investigados, colocándose de forma específica en un estado de riesgo para que los servidores públicos cumplan con las disposiciones legales que regulan su actuación.

También, se estima que podría afectar el desempeño operativo de esta Unidad de Investigación, ineberrando al público en general acerca de sus actividades administrativas y sustantivas, por lo cual pudieran ser considerados por terceros como motivación para desacreditarla y dificultar el cumplimiento de su función evaluadora del actuar de los servidores, ex servidores públicos y particulares.

Además, revelar el nombre de las personas físicas o morales que participaron en directamente en acciones que dieron origen a las observaciones FP-042/2019/022, FP-042/2019/023, FP-051/2020/012 y FP-051/2020/013 incide en la correcta conducción de las investigaciones ORFIS/UVF/2020/024/2021 y ORFIS/VR/2019/021/2021, pues podrían sustraerse de la acción de la justicia, ya que al enterarse de la investigación llevada a cabo se corre el riesgo de que, en caso de resultar responsables, no comparezcan a una citación, se fuguen del establecimiento o lugar donde se encuentran sus oficinas o, se ausenten de su domicilio sin aviso y haga imposible su localización, dichos supuestos no deben actualizarse en este asunto, ya que tal como lo dispone el artículo 194, fracción IV, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en caso de

Se otorga el acceso a la información solicitada en el presente expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 6º de la Ley General de Acceso a la Información Pública, en el sentido de que la información solicitada no es de carácter reservado, ni de carácter confidencial, ni de carácter secreto, por lo que se otorga el acceso a la información solicitada.



Remiten: URG/03/2022

Asunto: Se otorga solicitud de acceso
UT/EXP/518/2022/2022

que los previstos responsables sean particulares, se deberá señalar su nombre o razón social, así como el domicilio donde podrá ser emplazado, de tal manera que se proporcione la información requerida no se garantizará la localización de dicha persona física o moral.

4.4. Ponderación

En este apartado se puede considerar que el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, tiene dos fuentes primordiales: los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y todos los derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte y que se encuentran debidamente ratificados por el Senado de la República, normas que al estar elevadas a rango constitucional son consideradas como expresas, obligando a todas las autoridades su aplicación y en los casos que se requiera, a su interpretación.

Luego, el bien o el derecho de acceso a la información, así como la garantía de su ejercicio, están regulados en el segundo párrafo del artículo 1º de la Constitución Federal, en el ámbito internacional por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; además el diverso artículo 1º Constitucional también establece el derecho de petición, el cual implica la obligación de las autoridades de dictar a una petición hecha por escrito, está bien o mal formulada, un acuerdo también por escrito que debe hacerse saber en breve término al peticionario; es así que los investigados dichos se encuentran vinculados y relacionados en la medida que garantizan a los gobernados el derecho no solo a que se les dé respuesta a sus peticiones por escrito y en breve término, sino que se haga con la información completa, veraz y oportuna de que disponga o razonablemente deba disponer la autoridad, lo que constituye un derecho fundamental tanto de los individuos como de la sociedad.

Además, la Ley de los Estados Unidos Mexicanos sobre los derechos humanos reconoce en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, el valor de los principios de acceso a la información, así como el deber de proporcionar, en los casos y bajo las condiciones que sean convenientes.

Los mismos valores y los principios internacionales de acceso a la información y que los Estados miembros de la misma han adoptado en todo tiempo a los intereses de la sociedad en su conjunto.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de procurar, recibir, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, promover, asegurar y respetar los valores y los derechos humanos, en los términos que establece la Ley.

Esta petición se encuentra en el ámbito de la Ley General de Acceso a la Información Pública, por lo que debe ser atendida por esta Ley y la Ley de los Estados Unidos Mexicanos.

Como resultado de esta investigación, se concluye que la información solicitada no se encuentra en poder de la autoridad investigada, por lo que se debe denegar la solicitud de acceso a la información.



Remiten: URG/03/2022

Asunto: Se otorga solicitud de acceso
UT/EXP/518/2022/2022

Por otro lado, el propio artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la reforma en materia de derechos humanos, entre otras cosas, amplía el catálogo de los derechos humanos reconocidos para todos las personas incluyendo aquellos que se encuentran en los Tratados Internacionales de los que México forma parte, y señala que todas las autoridades están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de tal que el debido proceso es un derecho humano, el cual toda autoridad del país debe garantizar su prevalencia en cualquier proceso legal incoado en contra de algún ciudadano, mismo que se consagra en los artículos 17 y 18 de la Constitución Federal, 34 y 35 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), VIII y XXVI de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre; 2, 3 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y que se define como el conjunto de formalidades esenciales que deben observarse en cualquier procedimiento legal, para asegurar o defender los derechos y libertades de toda persona, además, se refiere a los medios que toda persona tiene para hacer valer sus derechos.

Además a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14 párrafo segundo, 16 párrafo primero, 19 párrafo primero, 21 párrafo primero y 102 apartado A párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva implícitamente el principio de presunción de inocencia, el cual se contiene de modo expreso en los diversos artículos 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; de ahí que dichos preceptos deben interpretarse de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados la interpretación más favorable que permita una mejor impartición de justicia. Es así que uno de los principios rectores del derecho que debe ser aplicable en todos los procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado, es el de presunción de inocencia como derecho fundamental de toda persona, aplicable y reconocible a quienes pudieran estar sometidos a un procedimiento administrativo sancionador y, en consecuencia, coexistir el poder sancionador del Estado, a través de autoridad competente. En ese sentido, el principio de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento administrativo sancionador—con multas o multas, según el caso—debido a su naturaleza punitiva, por la calidad de inocente de la persona que debe reconocerse en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la autoridad, en atención al derecho al debido proceso.

En ese orden de ideas, resulta fundamental puntualizar que el Título Cuarto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Título Cuarto de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, regulan tanto la información clasificada como establecen las disposiciones generales de la clasificación y declassificación de la información, es así que, en principio que toda la información que genere,



Remiten: URG/03/2022

Asunto: Se otorga solicitud de acceso
UT/EXP/518/2022/2022

posen o recaerán los sujetos obligados de acceso público, lo que en definitiva podrá limitarse ese acceso por las razones y motivos expresamente señalados en la ley investigadora, de igual manera, que la clasificación de la información se efectúa, entre otros casos, cuando se trata una solicitud de información y lo requerido encuadra en alguno de los supuestos que la ley contempla para considerarla reservada; que para efectuar la clasificación, esta debe realizarse por conducto del órgano competente para ello, como lo es el Comité de Transparencia de cada sujeto obligado mediante un acuerdo que se le hará saber al solicitante, en el que se expongan los fundamentos y razonamientos legales por los que se estime que en su caso, debe clasificarse la información así como el período que comprenderá la reserva.

Ahora bien, en el caso se acredita lo preocupado por los artículos 113 fracciones IX, X y XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 68 fracciones V, VI y VII de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, las cuales establecen que la información será reservada y por lo tanto no puede divulgarse cuando obstruya los procedimientos para hacer responsable a servidores, en servidores públicos o particulares involucrados con las faltas administrativas graves que en su caso se determinen como tales, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa, afecte los derechos del debido proceso y vulnere la confidencialidad de los expedientes judiciales o los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan concluido estos, ya que como se ha dejado apuntado en líneas anteriores, los expedientes de investigación internos ORFIS/ANF/2020/24/2021 y ORFIS/ANF/2019/03/2021 contienen información de procesos no concluidos y acciones que aún se encuentran en investigación, aunado a que esta Autoridad Investigadora es encuentra obligada en todo momento a garantizar el derecho al debido proceso de los ciudadanos que son sujetos a investigación, ya que en caso de que se concluya que derivado de las diligencias de investigación, existe responsabilidad administrativa imputable a los Investigados, se emite el correspondiente Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y se turna a la Autoridad Subordinada a efecto de que inicie el procedimiento administrativo correspondiente, es así que de publicarse la solicitada información se vulneraría el derecho al debido proceso que debe prevalecer en todo procedimiento incoado por cualquier autoridad en contra de algún ciudadano.

En efecto, las actuaciones administrativas contenidas en los mencionados expedientes de investigación se encuentran en trámite, es decir, la información integrada a la fecha sigue una valoración y análisis exhaustivos, el cual no es concluyente y, de ser el caso, podría verse el sentido del asunto, incluso, podría solventarse el presunto daño patrimonial con lo que se emitiría un Acuerdo de Conclusión y Archivo, o por el contrario, según los datos que se siguen aportando se pudieran vincular a más servidores o a servidores públicos, en conclusión, la información con la que actualmente cuenta la Autoridad Investigadora no se concluye y no se ha dictado resolución administrativa, actualizándose las fracciones IX, X y XI del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como las fracciones V, VI y VII del



Remiten: URG/03/2022

Asunto: Se otorga solicitud de acceso
UT/EXP/518/2022/2022

artículo 113 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Además a lo anterior, se significa que en las investigaciones llevadas a cabo por la Autoridad Investigadora todas las actuaciones que de ahí emanan se integran al respectivo expediente de investigación, así como todos los elementos necesarios para conocer un hecho del cual se desprenda la actuación solicitada de un servidor o de servidor público, o bien de un particular, y como consecuencia se determina la comisión de faltas administrativas, por lo que de otorgar copia del de la contestación y solventada entregada a esta Unidad de Investigación para atender las observaciones FF-0422019/022, FF-0422019/022, FF-0422019/022 y FF-0422019/022 puede poner en riesgo las funciones que ejercen los servidores públicos encargados de la investigación durante el desarrollo de las diversas diligencias de investigación, además de que las mismas aún se encuentran en trámite.

En ese orden de ideas y como se ha dejado apuntado en líneas que anteceden, es que se concluye que el dato que se consideraría al divulgar dicha información es mayor al que en su caso pudiera resultar el solicitante, ya que se revelaría medidas de investigación utilizadas por esta Unidad, además se vulneraría el derecho al debido proceso que la Autoridad Investigadora debe garantizar y preservar en favor de los Investigados, el cual se encuentra limitado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que se concluye que la reserva de las informaciones contenidas en los mencionados expedientes debe prevalecer sobre el derecho de información solicitado por el solicitante.

En más por el momento, aprobando la consulta para emitida en cordial saludo.

Atentamente
Xalapa-Enríquez, Ver., 17 de febrero de 2022.

LIC. MARÍA DE LOURDES DE LA LOZA GONZÁLEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

Cc) Sr. Srta. Solicitante, Sr. Srta. Representante Legal en Original y Fotocopia Digitalizada de la Original. Para conocimiento, archivo.
SUSCRITO

LIC. MARÍA DE LOURDES DE LA LOZA GONZÁLEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

Derivado de lo anterior, la parte recurrente expresó el agravio siguiente:

...
SE REALIZÓ UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN EL DÍA 31 DE ENERO DEL 2022, CON EL NÚMERO DE FOLIO 300564100001222, POR PARTE DE LA TITULAR DE TRANSPARENCIA, SE RECIBIÓ RESPUESTA QUE LA INFORMACIÓN SE ENTREGARÍA SÓLO DE MANERA PERSONAL O A DOMICILIO, SE INDICO SE RECIBIRÍA LA INFORMACIÓN DE MANERA PERSONAL, SE ANEXO A LA RESPUESTA POR PARTE DE LA TITULAR DE TRANSPARENCIA UN FORMATO PARA REALIZAR EL PAGO BANCARIO, AL MOMENTO DE REALIZAR EL PAGO EN BANCOMER QUE ES EL BANCO INDICADO EN EL FORMATO, SE INDICA POR PARTE DEL PERSONAL QUE EL NUMERO DE REFERENCIA Y DATOS BANCARIOS NO EXISTEN, MOTIVO POR EL CUAL SE TERMINO LA VIGENCIA, PARA REALIZAR LA QUEJA.
EL DÍA 09 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, SE VOLVIO A SOLICITAR LA MISMA INFORMACIÓN, CON EL NÚMERO DE FOLIO 300564100004222, SE RECIBE RESPUESTA POR LA TITULAR DE TRANSPARENCIA QUE HAY NEGATIVA DE INFORMACIÓN, NO JUSTIFICANDO EL PORQUE EN LA PRIMERA SOLICITUD SE DIJO QUE SI SE ENTREGARIA Y AHORA HAY NEGATIVA PARA ENTREGAR LA INFORMACIÓN.
SOLICITO AL PLENO ME SEA ENTREGADA LA INFORMACIÓN, COMO FUE LA RESPUESTA POR PARTE DE LA TITULAR DE TRANSPARENCIA DEL ORFIS.
SOLICITO AL PLENO SEA SANCIONADA LA TITULAR RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL ORFIS, POR LAS DIFERENTES RESPUESTAS AL SOLICITAR LA MISMA INFORMACIÓN, ES UNA BURLA PARA EL CIUDADANO QUE LA TITULAR DE TRANSPARENCIA NO ACTUE CON ÉTICA PROFESIONAL.
...


Por su parte, el sujeto obligado compareció durante la sustanciación del recurso de revisión por conducto del Titular de la Coordinación de Transparencia, indicando lo siguiente:

...
Por este medio se remite oficio OFS/UT/8227/05/2022 y documentación adjunta consistente en el Acta de la Décima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del ORFIS, así como el oficio ORFIS-OF-UT-124-04-2022 y memorándum UI/109/04/2022, por medio del cual el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, comparece en el Recurso de Revisión IVAI-REV/2096/2022/I. P.D. Disculpen la calidad de impresión, se me está terminando mi tóner.
...

Asimismo adjuntó en el sistema de comunicación con los sujetos obligados los siguientes archivos:

Página 1 de 7

recibir todo tipo de notificaciones: ycardenas@orfis.gob.mx, y transparencia@orfis.gob.mx.

 **ORFIS**
Oficio OFS/UT/8227/05/2022
Asunto: Comparecencia respecto al Recurso de Revisión IVAI-REV/2096/2022/I

MTRA. NALDY PATRICIA RODRÍGUEZ LAGUNES
COMISIONADA PRESIDENTA A CARGO DE LA PONENCIA
PRIMERA DEL INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
P R E S E N T E

Quien suscribe Lic. Violeta Cárdenas Vázquez, en mi carácter de Titular de la Unidad de Transparencia del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, lo que se acredita con mi nombramiento de fecha primero de octubre del año dos mil diecinueve, tal y como consta en los archivos de la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana del Órgano garante que dignamente preside, ante Usted, respetuosamente comparezco y expongo:

Que una vez vista la notificación recibida mediante el Sistema de Comunicación entre Organismos Garantes y Sujetos Obligados (SICOM) de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) respecto de la admisión del Recurso de Revisión al superíndice señalado, así como de la puesta a disposición del expediente respectivo para los efectos que establece el artículo 192, fracción III, inciso b) y 216 fracción II de la Ley Número 876 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave¹, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25 y 151 fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; COMPAREZCO PARA RATIFICAR LA RESPUESTA PRIMIGENIA BRINDADA POR EL SUJETO OBLIGADO QUE REPRESENTO, a la solicitud de Información identificada con el número de folio 300564100004222 del Índice del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI) de la PNT, origen del presente controvertido.

Derivado de lo anterior, y con base en la personalidad señalada en el premio, manifiesto lo siguiente:

I.-CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL PARA RECIBIR NOTIFICACIONES: Dando cumplimiento a lo requerido en el Acuerdo Cuarto del Auto de Admisión de fecha diecinueve de abril del año en curso, señalo los siguientes correos electrónicos para

II.- Bajo protesta de decir verdad, la suscrita en este acto manifiesta no tener conocimiento que sobre el acto recurrido se hubiere interpuesto algún recurso o medio de defensa ante los Tribunales del Poder Judicial del Estado o de la Federación.

III.- OFRECIMIENTO DE PRUEBAS

a) Documental pública consistente en el oficio OFS/UT/5768/03/2022, de fecha veinticinco de marzo del año en curso, signado por quien suscribe, así como la documentación adjunta que le acompaña, mismo que se cita y no se exhibe puesto que obra en el registro histórico de la multitudinaria solicitud de información, dentro del Sistema de Comunicación con los Sujetos Obligados; probanza que guarda relación con el numeral 2 del apartado de manifestaciones.

b) Documental pública consistente en el Acta de la Décima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, de fecha veinticinco de marzo del año en curso, mediante la cual se aprobó el Acuerdo CT-26-03-2022/CIR/03, relativo a la aprobación de la Clasificación de la Información en modalidad Reservada, referente a los documentos que conforman la contestación y solventación entregada al Órgano de Fiscalización Superior, derivado de las observaciones a las Cuentas Públicas 2019 y 2020 del Instituto Tecnológico Superior de Perote, registradas de la siguiente manera: FP-042/2018/022, FP-042/2018/023, FP-051/2020/012 y FP-051/2020/013, respectivamente, que forman parte de las investigaciones a cargo de la Unidad de Investigación de este Órgano Fiscalizador, identificadas con los números de expediente ORFIS/UI/IF/2020/024/2021 y ORFIS/SIR/2019/021/2021, y que también puede ser consultada en la siguiente liga: <http://www.orfis.gob.mx/actas-extraordinarias-2022/>; probanza que guarda relación con el numeral 2 de las manifestaciones adelante enumeradas.

c) Documental pública consistente en el Oficio OFS/2945/02/2022 y documentación anexa, mediante el cual se brindó la atención y respuesta a la solicitud identificada con el número de folio 300564100001222 del Índice del SISAI de la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual se cita y no se exhibe para efecto de que esta H. Ponencia pueda constatar directamente

¹ En la subsiguiente Ley 875

su contenido dentro del registro histórico de ese instrumento electrónico; probanza que guarda relación con el numeral 4 de las manifestaciones adelante enumeradas.

- d) Documental pública consistente en el oficio ORFIS-OF-UT-124-04-2022, signado por quien suscribe, dirigido a la Titular de la Unidad de Investigación de este Órgano Fiscalizador; prueba que relaciono con el numeral 6 de mi capítulo de manifestaciones.
- e) Documental pública consistente en el Memorándum UI/09/04/2022, signado por la Titular de la Unidad de Investigación de este Organismo Autónomo; probanza que relaciono con el arábigo 7 de mis manifestaciones.
- f) Presuncional legal y humana consistente en las deducciones lógico jurídicas y humanas que se desprendan del expediente que nos ocupa y en cuanto favorezcan a los intereses de la parte que represento y que relaciono con todas y cada una de las manifestaciones del presente curso.
- g) Instrumental de actuaciones consistente en todo lo que favorezca a los intereses de mi representado, relacionando esta probanza con todas y cada una de las manifestaciones del presente curso.

IV.- DESIGNACIÓN DE DELEGADOS: No se designan delegados.

V.- MANIFESTACIONES QUE EN DERECHO PROCEDAN Y QUE TENGAN RELACIÓN CON EL RECURSO INTERPUESTO EN CONTRA DE ESTE ÓRGANO:

1.- Como es de su conocimiento, en fecha diez de marzo del año en curso este Órgano Fiscalizador recibió la solicitud de información registrada con el número de folio 300564100004222 del índice del SISA! de la Plataforma Nacional de Transparencia, del tenor siguiente:

"SE SOLICITA NUEVAMENTE LA INFORMACIÓN YA SOLICITADA Y QUE A LA FECHA NO HA SIDO ENTREGADA, POR DAR DATOS ERRÓNEOS PARA REALIZAR EL PAGO. EL FOLIO ASIGNADO A LA SOLICITUD ANTERIOR ES • No. de folio: 300564100001222. LA INFORMACIÓN SOLICITADA ES LA SIGUIENTE:

Solicito la copia fiel de la constatación y solventación entregada al Órgano de Fiscalización de las siguientes observaciones de las cuentas públicas, del Instituto Tecnológico Superior de Perote.

Cuenta Pública 2020

Observación Número: FP-051/2020/012

PARTE DEL PERSONAL QUE EL NÚMERO DE REFERENCIA Y DATOS BANCARIOS NO EXISTEN, MOTIVO POR EL CUAL SE TERMINÓ LA VIGENCIA PARA REALIZAR LA QUEJA.

EL DÍA 09 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, SE VOLVIÓ A SOLICITAR LA MISMA INFORMACIÓN, CON EL NÚMERO DE FOLIO 300564100004222, SE RECIBE RESPUESTA POR LA TITULAR DE TRANSPARENCIA QUE HAY NEGATIVA DE INFORMACIÓN, NO JUSTIFICANDO EL PORQUE EN LA PRIMERA SOLICITUD SE DIJO QUE SI SE ENTREGARÍA Y AHORA HAY NEGATIVA PARA ENTREGAR LA INFORMACIÓN.

SOLICITO AL PLENO ME SEA ENTREGADA LA INFORMACIÓN, COMO FUE LA RESPUESTA POR PARTE DE LA TITULAR DE TRANSPARENCIA DEL ORFIS.

SOLICITO AL PLENO SEA SANCIONADA LA TITULAR RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL ORFIS, POR LAS DIFERENTES RESPUESTAS AL SOLICITAR LA MISMA INFORMACIÓN, ES UNA DURLA PARA EL CIUDADANO QUE LA TITULAR DE TRANSPARENCIA NO ACTÚE CON ÉTICA PROFESIONAL.

4.- Al respecto, en primer término es imperioso precisar que, tal y como lo puede corroborar esta H. Ponencia, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, al atender y dar respuesta a la solicitud identificada con el número de folio 300564100001222, de manera detallada se le explicó el procedimiento y el porqué del cobro de los costos de reproducción, anexo a que como anexo 3, se adjuntó el *Formato de Pago de Derechos* correspondiente al Folio/Expediente 300564100001222, en donde se señala de forma fehaciente los datos bancarios de este Órgano Autónomo, relativos a la institución bancaria, número de cuenta y número clave para realizar el pago correspondiente por la expedición de "la copia fiel" de la documentación solicitada, así como para la generación de su correspondiente versión pública; por lo que el señalamiento que realiza la recurrente en torno a que se le dieron datos erróneos, debe ser desestimado.

5.- Ahora bien, tal y como consta en el expediente de marras, la Unidad de Transparencia, tanto en la primera solicitud que hace alusión la ahora parte recurrente, como en la que dio origen al Recurso de Revisión que en este acto nos ocupa, realizó los trámites internos necesarios para localizar la información requerida, lo que se acredita con la documentación adjunta que acompaña a cada una de las respuestas respectivas.

Si bien es cierto que la Unidad de Transparencia es el área responsable de recibir y tramitar las solicitudes de información que recibe el sujeto obligado, también lo es que las respuestas otorgadas a los solicitantes derivan de los elementos proporcionados por las áreas administrativas del mismo, por lo que, en el caso particular del tema recurrido, la respuesta otorgada al hoy impetrante no fue una respuesta propia de una servidora como Titular de la Unidad de Transparencia, sino

Observación Número: FP-051/2020/012

Observación Número: FP-051/2020/013

Cuenta Pública 2019

Observación Número: FP-042/2019/022

Observación Número: FP-042/2019/023

-INDICAR EL FUNDAMENTO LEGAL POR EL CUAL NO PUEDEN ENTREGAR LA INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA.

-INDICAR DIRECCIÓN Y HORARIO PARA RECOGER LA INFORMACIÓN.

-SE ACORDÓ A PAGAR A BANCOMER EN DICHO BANCO INDICARON QUE LOS DATOS PARA EL PAGO NO SON CORRECTOS, QUE FALTA EL NÚMERO DE CUENTA,

CONVENIO, NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN QUE RECIBE EL PAGO". (SIC).

2.- A través del oficio OFS/UT/5769/03/2022, este Órgano Autónomo brindó la respuesta correspondiente a la solicitud que dio origen al presente controvertido, en tiempo y forma, debidamente fundada y motivada, haciendo del conocimiento del ahora recurrente lo que el área responsable de la información, esto es, la Unidad de Investigación, precisó a través de su Memorándum UI/089/03/2022: que la información solicitada forma parte de las investigaciones a cargo de esa Unidad, identificadas con los números de expedientes ORFIS/UI/IF2020/024/2021 y ORFIS/SI/IR2019/021/2021, motivo por el cual solicitó que el Comité de Transparencia la clasificara como reservada, lo que aconteció en la Décima Sesión Extraordinaria del ejercicio 2022, a través del Acuerdo CT-25-03-2022/CIR/08. Al respecto, a la persona solicitante se le proporcionó la liga del Portal de Transparencia de este Órgano Autónomo, donde se encuentran a disposición del público en general, todas las actas de dicho Órgano Colegiado, para su mayor conocimiento y comprensión del caso: <http://www.orfis.gob.mx/actas-extraordinarias-2022/>

Cabe mencionar que el Acuerdo de Clasificación de Modalidad Reservada cumple a cabalidad con todos los requisitos establecidos en la legislación de la materia, tal y como consta en la fundamentación, motivación, prueba de daño, fuente de información, período, información que abarca y responsable del resguardo.

3.- No obstante lo anterior, la parte ahora recurrente, al interponer el medio de impugnación que nos ocupa, señaló como agravio lo siguiente:

SE REALIZÓ UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN EL DÍA 31 DE ENERO DEL 2022, CON EL NÚMERO DE FOLIO 300564100001222, POR PARTE DE LA TITULAR DE TRANSPARENCIA, SE RECIBIÓ RESPUESTA QUE LA INFORMACIÓN SE ENTREGARÍA SÓLO DE MANERA PERSONAL, O A DOMICILIO, SE INDICÓ SE RECIBIRÍA LA INFORMACIÓN DE MANERA PERSONAL, SE ANEXO A LA RESPUESTA POR PARTE DE LA TITULAR DE TRANSPARENCIA UN FORMATO PARA REALIZAR EL PAGO BANCARIO, AL MOMENTO DE REALIZAR EL PAGO EN BANCOMER QUE ES EL BANCO INDICADO EN EL FORMATO, SE INDICA POR

el resultado del trámite realizado para atender la solicitud de información, esto en apego a lo señalado por los artículos 132 primer párrafo, 134 fracciones II, III y VII de la Ley 875 de Transparencia local.

6.- Ahora bien, para efecto de dilucidar la respuesta otorgada mediante el oficio OFS/UT/5769/03/2022 y documentación adjunta, la Unidad de Transparencia, mediante oficio ORFIS-OF-UT-124-04-2022, hizo del conocimiento de la Unidad de Investigación, de la admisión del Recurso de Revisión IVAI-REV/2096/2022/I así como le requirió señalara el motivo de la discordancia entre los memorandos UI/031/02/2022 y UI/089/03/2022, relacionados con la respuesta a las solicitudes identificadas con los folios número 300564100001222 y 300564100004222, respectivamente.

7.- Al respecto, por medio de su similar UI/09/04/2022, en la parte que interesa, la Unidad de Investigación manifestó lo siguiente:

(Por lo que hace a la solicitud 300564100001222 y referida por medio del Memorándum UI/031/02/2022) ... se formuló en un momento en que esta autoridad desconocía la existencia de la documentación solicitada y su contenido integral, es decir, no le tuvo en su poder y por tanto no estaba integrada a las investigaciones de responsabilidades administrativas ORFIS/UT/IF2020/024/2021 y ORFIS/SI/IR2019/021/2021, por lo que al haber surgido dicha la sustracción solicitó al área correspondiente (Auditoría Especial de Fiscalización y Cuentas Públicas) otorgar el principio de buena fe.

c. Aclaro que no existe la discordancia ... pues cuando fue formulada la solicitud UT/EXPSO/SISA/042/02/2022² (300564100004222) y turnada a esta área para su respuesta, la documentación requerida por el particular ya había sido puesta a disposición de esta autoridad investigadora por la Auditoría Especial de Fiscalización y Cuentas Públicas...

Es decir, si para atender la segunda solicitud esta Unidad de Investigación consideró que la documentación solicitada por el particular debía clasificarse como reservada se debió a dos factores primordiales: i. Que dicha información ya había sido formal y materialmente puesta a disposición de esta autoridad investigadora, corroborando así su existencia, y ii. Que la misma ya había sido sujeta a un análisis preliminar e integrado a sus respectivas investigaciones para las valoraciones pertinentes en materia de responsabilidades.

² Número de expediente interno de la solicitud de información.

8.- Es por ello que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz considera respetuosamente, que son infundados e inoperantes los motivos de deseno manifestados por la recurrente.

Con base en lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, atentamente solicito:

PRIMERO. - Me sango por presentada, en mi carácter de Titular de la Unidad de Transparencia del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, desahogando en tiempo y forma la vista correspondiente al Recurso de Revisión IVAI-REV/2096/2022/I, así como también señalando correo electrónico oficial para recibir toda clase de notificaciones.

SEGUNDO. - Considere en el proyecto de resolución correspondiente, las manifestación expresadas en el presente curso para efecto de que, de conformidad con los artículos 216 fracción II y demás relativos y aplicables de la Ley local de Transparencia, el Pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, considere infundado e inoperante el agravio manifestado por la recurrente, y en consecuencia, confirme la respuesta otorgada mediante el oficio OFS/UT/5790/03/2022 y documentación adjunta como lo es el Acuerdo CT-25-03-2022/CIR/08 del Comité de Transparencia del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, aprobado en su Décima Sesión Extraordinaria.

Xalapa de Enriquez, Ver., 03 de mayo de 2022

ATENTAMENTE

LIC. VIOLETA CÁRDENAS VÁZQUEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

C.e.p. MTRA. DELIA GONZÁLEZ COBOS.- Auditora General.- Para su superior conocimiento.

IVAI-REV/2096/2022/I



COMITÉ DE TRANSPARENCIA

CT-EXT-10-2022

ACTA DE LA DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

En las oficinas del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, sita en carretera Xalapa-Veracruz No.1102, esquina Boulevard Culturas Veracruzanas, Colonia Reserva Territorial, C.P. 91060, siendo las dieciséis horas con diez minutos del día veinticinco de marzo del año dos mil veintidos y previa convocatoria, se encuentran reunidos las ciudadanas y los ciudadanos: Dr. Tomás Antonio Bustos Mendoza, Auditor Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas (Presidente); Lic. Cynthia Reyes Díaz Muñoz, Secretaria Técnica (Vocal); Lic. Felipe de Jesús Marín Carreón, Director General de Asuntos Jurídicos (Vocal); C.P.A. Arturo Juárez Montiel, Director General de Administración y Finanzas (Vocal); y la Lic. Violeta Cárdenas Vázquez, Titular de la Unidad de Transparencia (Secretaría Ejecutiva); lo anterior con la finalidad de llevar a cabo la DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- Pase de lista y verificación del quórum.
- Aprobación del orden del día.
- Análisis y, en su caso, aprobación de la Clasificación de la Información en modalidad Reservada, correspondiente a los documentos que conforman la contestación y solventación entregada al Órgano de Fiscalización Superior derivado de las observaciones a las Cuentas Públicas 2019 y 2020 del Instituto Tecnológico Superior de Perote, registradas de la siguiente manera: FP-042/2019/022, FP-042/2019/023, FP-051/2020/012 y FP-051/2020/013, respectivamente, que forman parte de las investigaciones a cargo de la Unidad de Investigación de este Órgano, identificadas con los números de expediente ORFIS/UMF2020/024/2021 y ORFIS/SIR2019/021/2021; lo anterior, a efecto de atender la solicitud de información registrada con el número de folio 300564100004222, del índice de la Plataforma Nacional de Transparencia.
- Cierre de la sesión.



COMITÉ DE TRANSPARENCIA

CT-EXT-10-2022

- PASE DE LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.** Se procede a pasar lista de asistencia, encontrándose presentes todos los servidores públicos integrantes de este Órgano Colegiado, por lo que se declara la existencia de quórum legal.
- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.** Se somete a la consideración de los asistentes el orden del día que tienen a la vista y acuerdan por unanimidad su aprobación.
- ANÁLISIS Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN MODALIDAD RESERVADA, CORRESPONDIENTE A LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA CONTESTACIÓN Y SOLVENTACIÓN ENTREGADA AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DERIVADO DE LAS OBSERVACIONES A LAS CUENTAS PÚBLICAS 2019 Y 2020 DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE, REGISTRADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:** FP-042/2019/022, FP-042/2019/023, FP-051/2020/012 Y FP-051/2020/013, RESPECTIVAMENTE, QUE FORMAN PARTE DE LAS INVESTIGACIONES A CARGO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE ESTE ÓRGANO, IDENTIFICADAS CON LOS NÚMEROS DE EXPEDIENTE ORFIS/UMF2020/024/2021 Y ORFIS/SIR2019/021/2021; LO ANTERIOR, A EFECTO DE ATENDER LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN REGISTRADA CON EL NÚMERO DE FOLIO 300564100004222, DEL ÍNDICE DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA. Con anuencia del Presidente, la Secretaria Ejecutiva da lectura a los siguientes:

ANTECEDENTES

- En fecha 10 de marzo del año 2022, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, se recibió la solicitud de información, misma que se detalla a continuación:



COMITÉ DE TRANSPARENCIA

CT-EXT-10-2022

NÚMERO DE FOLIO PNT	NÚMERO DE REGISTRO UT	SOLICITUD
300564100004222	UT/EXPS/SISAI042/02/2022	LA INFORMACIÓN SOLICITADA ES LA SIGUIENTE: Solicito la copia fiel de la contestación y solventación entregada al órgano de fiscalización de las siguientes observaciones de las cuentas públicas, del Instituto Tecnológico Superior de Perote. Cuenta Pública 2020 Observación Número: FP-051/2020/012 Observación Número: FP-051/2020/012 Observación Número: FP-051/2020/013 Cuenta Pública 2019 Observación Número: FP-042/2019/022 Observación Número: FP-042/2019/023 -INDICAR EL FUNDAMENTO LEGAL POR EL CUAL NO PUEDEN ENTREGAR LA INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA.- -INDICAR DIRECCIÓN Y HORARIO PARA RECOGER LA INFORMACIÓN. (Sic.)

- Mediante oficio ORFIS-OF-UT-060-03-2022, se turnó la solicitud de información que nos ocupa a la Unidad de Investigación.
- A través del Memorándum UI/069/03/2022, el área administrativa en comento otorgó contestación, en la parte que interesa, en los siguientes términos:

MEMORÁNDUM	RESPUESTA
Memorándum UI/069/03/2022	<ul style="list-style-type: none">Esta Unidad de Investigación inició las investigaciones ORFIS/UMF2020/024/2021 y ORFIS/SIR2019/021/2021 derivadas de los informes de resultados de las Cuentas Públicas 2019 y 2020 del ente fiscalizable Instituto Tecnológico Superior de Perote, formándose un expediente para cada una.Mediante oficio AEFCEPM-037/02/2022, del primero de febrero del año en curso, la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas indicó que la información digital soporte del presunto daño patrimonial de las observaciones financieras y técnicas de los entes estatales por lo que ha sido a las Cuentas Públicas 2017, 2018, 2019 y 2020, incluido el que hoy nos ocupa, se encuentran disponibles en una ruta de intranet de este organismo.La documentación solicitada por el particular en copia simple corresponde a la entregada en el oficio AEFCEPM-037/02/2022, por lo tanto, está siendo objeto de análisis y valoración dentro de las investigaciones arriba referidas.Por lo anterior, esta unidad considera que dicha información debe clasificarse como reservada hasta por tres años, por los motivos y causas siguientes:



COMITÉ DE TRANSPARENCIA

CT-EXT-10-2022

4.- En consecuencia, se emitió la convocatoria a los integrantes de este Comité, para su pronunciamiento y emisión, en su caso, del acuerdo correspondiente, en atención a los antecedentes señalados con antelación y los siguientes: _____

CONSIDERANDOS

- Que de conformidad con lo ordenado por el artículo 8 fracción VII de la Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave¹, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz tiene el carácter de sujeto obligado.
- Que la clasificación de la información es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, previstos en la ley y es el Comité de Transparencia el que deberá confirmar, modificar o revocar la decisión, de conformidad con los artículos 131 fracción II y 149 de la Ley 875.
- Que el artículo 60 fracción I de la Ley 875 señala que la clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que se reciba una solicitud de acceso a la información, como lo es el origen que motiva los pronunciamientos de este Órgano Colegiado.
- Que el artículo 68 de la Ley 875 establece los supuestos para que se considere una información como reservada y por lo tanto no pueda difundirse, entre los cuales se encuentran los relativos a que la información obstruya los procedimientos para fijar responsabilidad a los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa; afecte los derechos del debido proceso, y vulnere la conducción de los expedientes judiciales o los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; hipótesis contenidas en las fracciones V, VI y VII de dicho artículo, respectivamente.

¹ En lo subsecuente, Ley 875 de Transparencia.



COMITÉ DE TRANSPARENCIA

CT-EXT-10-2022

e) Lo anterior se robustece con los artículos Cuarto, Quinto, Séptimo fracción I, Octavo, Vigésimo octavo, Vigésimo noveno y Trigésimo de los *Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclassificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas*, que prevén que podrá considerarse como información reservada, aquella que obstruya los procedimientos para fijar responsabilidad a los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa correspondiente; aquella que de divulgarse afecte el debido proceso; y aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio.

f) Por consiguiente, se somete a su consideración la Clasificación de la información en modalidad Reservada, respecto a los documentos que conforman la contestación y solventación entregada al Órgano de Fiscalización Superior derivado de las observaciones a las cuentas públicas 2019 y 2020 del Instituto Tecnológico Superior de Perote, registradas de la siguiente manera: FP-042/2019/022, FP-042/2019/023, FP-051/2020/012 y FP-051/2020/013, respectivamente, que forman parte de las Investigaciones a cargo de la Unidad de Investigación de este Órgano, identificadas con los números de expediente ORFIS/UI/F2020/024/2021, ORFIS/SIR2018/021/2021; con base en la siguiente:

FUNDAMENTACIÓN
Artículos 100, 103, 106 fracción I y 113 fracciones IX, X y XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 60 fracción I, 68 fracciones V, VI y VII de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y Cuarto, Quinto, Séptimo fracción I, Octavo, Vigésimo octavo, Vigésimo noveno y Trigésimo de los <i>Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclassificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas</i> , publicados en el Diario Oficial de la Federación en fechas quince de abril de dos mil dieciséis, y demás relativos y aplicables.
MOTIVACIÓN
Resulta que el particular en la solicitud que nos ocupa pidió copias íntegras tanto de las contestaciones como de las solventaciones que se entregaron a este Órgano de Fiscalización para atender las observaciones FP-042/2019/022 y FP-042/2019/023 señaladas en el Informe de la Cuenta Pública 2019 y las diversas FP-051/2020/012 y FP-051/2020/013 señaladas en el Informe de la Cuenta Pública 2020 del Instituto Tecnológico Superior de Perote.
En ambos informes se instruyó a este Organismo Constitucional Autónomo para que diera inicio a las investigaciones a que hubiera lugar respecto de las observaciones de presunto daño patrimonial que constituyen la probable comisión de faltas graves de conformidad con el Título Tercero Capítulos II, III y IV de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.



COMITÉ DE TRANSPARENCIA

CT-EXT-10-2022

Para constar con lo anterior, por acuerdos del treinta de agosto de dos mil veintuno y diecinueve de noviembre de dos mil veintuno, se iniciaron las investigaciones números ORFIS/UI/F2020/024/2021 y ORFIS/SIR2018/021/2021, mismas que al momento en que se formuló la solicitud que nos ocupa se encuentran abiertas y que pueden determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la Ley General de Responsabilidades Administrativas señala como faltas administrativas de servidores y ex servidores públicos así como de particulares.

Es preciso señalar que la Unidad de Investigación, en su carácter de Autoridad Investigadora, debe atender los principios que rigen la investigación de responsabilidades administrativas y que se encuentran descritos en el artículo 80 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los cuales son, legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y respeto a los derechos humanos; e a su vez es responsable de los criterios de oportunidad, exhaustividad y eficiencia en la investigación, la integridad de los datos y documentos, así como del resguardo del expediente en su conjunto.

Una vez concluida la investigación, la Unidad de Investigación estará en condiciones de emitir un acuerdo de conclusión y archivo o un informe de presunta responsabilidad administrativa, ya que así lo prevé el artículo 100 de la citada Ley General; es por ello que se actualiza la imposibilidad de entregar al solicitante la información requerida, pues de hacerlo se contravenirían los principios y criterios arriba mencionados, perjudicando los derechos humanos de los servidores o ex servidores públicos así como de los particulares sujetos a investigación, además de dar a conocer información sensible que podría causarles un daño en su esfera jurídica, ya que al atribuirles diversos señalamientos y acusaciones por la comisión de presuntas irregularidades administrativas, no implica necesariamente que sean responsables de las mismas, ello en atención a que el procedimiento de investigación no ha terminado.

PRUEBA DE DAÑO

RIESGO REAL
Debido a que no han concluido las investigaciones por parte de la Unidad de Investigación de este Órgano Autónomo, estas podrían verse afectadas por la intervención de elementos externos tales como exposición a medios de comunicación o a la intromisión de terceros que no forman parte de dichas investigaciones. En ese contexto, resulta fundamental insistir en que esta Unidad de Investigación se encuentra obligada en todo momento a garantizar el derecho al debido proceso de los ciudadanos que son sujetos a investigación, al cual se encuentra tutelado en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 4° de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ya que en caso de que se concluya que derivado de las diligencias de investigación existe responsabilidad administrativa imputable a los investigados, se emita el correspondiente informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y se turnará a la Autoridad Subordinada a efecto de que inicie el procedimiento de responsabilidad correspondiente, es así que, como se ha dejado apuntado en líneas que anteceden, de publicarse la mencionada información se violentaría ese derecho fundamental que debe prevalecer en todo procedimiento incoado por cualquier autoridad en contra de cualquier persona. Sirve de apoyo a lo anterior el siguiente criterio establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Época X, Libro 3, Tomo I, febrero de 2014, página 396, el cual señala:

DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO.

Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento judicial, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como "formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que



COMITÉ DE TRANSPARENCIA

CT-EXT-10-2022

los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica desfavorablemente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia P.J. 47/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y en Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se funda la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirime las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado con el elenco de garantías mínimas que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exige que se hagan competentes las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identificó dos espacios: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etérea, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio, y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que puedan encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consultiva, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su defensa sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza.

Es de significarse que al revelar los nombres de las personas físicas investigadas se violentaría el principio de presunción de inocencia, al cual, como derecho fundamental de toda persona, resulta aplicable a los procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado, toda vez que la fiscalidad permeada con la instauración de un procedimiento de investigación se descubre al con la conducta realizada por los servidores o ex servidores públicos se configuren faltas administrativas graves y otros particulares se encuentren vinculados con las mismas, ya que de ser el caso se desvirtuaría a través de la actividad sancionatoria la responsabilidad reparatoria, y los sancionados tendrían, en su caso, que restituir a la hacienda pública y al patrimonio de los entes públicos el monto de los daños y perjuicios estimados en dinero que se hayan causado, esto con el fin de indemnizar el patrimonio del Instituto Tecnológico Superior de Perote.

En razón de lo anterior, es que se insiste que en este asunto se actualiza la imposibilidad para proporcionar la información solicitada por el peticionario, toda vez que se actualiza a una persona física o moral como vinculada a una falta administrativa grave, así que existe certeza de ello, en virtud de que la Autoridad Investigadora se encuentra realizando diversas diligencias con la finalidad de allegarse de todos los elementos de convicción que le permitan conocer la verdad y estar en posibilidad de emitir el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.

Ello derivado de que el peticionario requirió copias íntegras tanto de la contestación como de la solventación que se haya entregado a esta Órgano de Fiscalización Superior que atienda las observaciones FP-042/2019/022, FP-042/2019/023, FP-051/2020/012 y FP-051/2020/013, así como como resultado del Procedimiento de Fiscalización Superior a las Cuentas Públicas 2019 y 2020 del Instituto Tecnológico Superior de Perote, en el que se determinó un probable daño patrimonial, por lo que la conducta desplegada por los servidores o ex servidores públicos y particulares, podrían constituir faltas graves.

RIESGO DEMOSTRABLE

De darse a conocer dicha información se estarían difundiendo investigaciones no concluidas y acciones que aún se encuentran en curso de investigación y por lo mismo podrían contener datos inexactos, incrementando la posibilidad de dañar la actuación de esa autoridad y el procedimiento mismo, ya que las informaciones y documentos que sustentan las observaciones FP-042/2019/022, FP-042/2019/023, FP-051/2020/012 y FP-051/2020/013 se encuentran integradas en los expedientes de investigación arriba mencionados, de tal manera que si algún servidor o ex servidor público resultare presunto responsable por la comisión de alguna falta administrativa grave, la Autoridad Investigadora estará en posibilidad de analizar si los particulares intervinieron en los actos que originaron esas conductas y en su caso, procederá a señalarlas como particulares vinculados con faltas administrativas graves.

Adicionalmente, se estaría difundiendo información de procesos que aún no han quedado firmes y podría provocar que las estrategias procesales que en su caso pudieran derivarse, fueran conocidas y la parte responsable implementara acciones y tácticas dilatorias u otras que pudieran provocar alguna convicción errónea en el evaluador o juzgador, además de que la información contenida no es concluyente y la misma puede ser modificada en cualquier momento a la luz de las diligencias de investigación que en su caso sean desahogadas posterior a la entrega de la información solicitada.

RIESGO IDENTIFICABLE

La divulgación de la información podría alterar los resultados de las actividades de seguimiento de las acciones emitidas con base en las diligencias de investigación desahogadas, poniendo a disposición del público en general datos sensibles que afectarían las tareas de revisión y evaluación de la conducta de los ciudadanos investigados, colocándose de forma específica en un estado de riesgo para que los servidores públicos cumplan con las disposiciones legales que regulan su actuación.

También, se estima que podría afectar el desempeño operativo de la Unidad de Investigación informando al público en general acerca de sus actividades administrativas y sustantivas, por lo cual pudieran ser consideradas por terceros como motivación para desacreditar y dificultar el cumplimiento de su función evaluadora del actuar de los servidores, ex servidores públicos y particulares.

Además, revelar el nombre de las personas físicas o morales que participaron directamente en acciones que dieron origen a las observaciones FP-042/2019/022, FP-042/2019/023, FP-051/2020/012 y FP-051/2020/013 incide en la correcta conducción de las investigaciones ORFIS/II/IF/2020/024/2021 y ORFIS/SI/IR/2019/021/2021, pues podrían sustraerse de la acción de la justicia, ya que al enterarse de la investigación llevada a cabo se corre el riesgo de que, en caso de resultar responsables, no comparezcan a una citación, se fuguen del establecimiento o lugar donde se encuentren sus oficinas o, se ausenten de su domicilio sin aviso y haga imposible su localización, dichos supuestos no deben actualizarse en este asunto, ya que tal como lo dispone el artículo 194, fracción IV, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en caso de que los presuntos responsables sean particulares, se deberá señalar su nombre o razón social, así como el domicilio donde podrán ser emplazados, de tal manera que al proporcionar la información requerida no se garantizará la localización de dicha persona física o moral.

PONDERACIÓN

En este apartado es preciso considerar que el texto vigente del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, tiene dos fuentes primordiales: los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y todos los derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte y que se encuentren debidamente ratificados por el Senado de la República, normas que al estar elevadas a

rango constitucional son consideradas como supremas, obligando a todas las autoridades su aplicación y en los casos que se requiera, a su interpretación.

Luego entonces, el derecho de acceso a la información, así como la garantía de su ejercicio, están regulados en el segundo párrafo del artículo 6° de la Constitución Federal, en el ámbito internacional por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; además el artículo 8° Constitucional también establece el derecho de petición, el cual implica la obligación de las autoridades de dictar a una petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo también por escrito que debe hacerse saber en breve término al peticionario; es así que los mencionados derechos se encuentran vinculados y relacionados en la medida que garantizan a los gobernados el derecho no solo a que se les dé respuesta a sus peticiones por escrito y en breve término, sino que se haga con la información completa, veraz y oportuna de que disponga o razonablemente deba disponer la autoridad, lo que constituye un derecho fundamental tanto de los individuos como de la sociedad.

Por otro lado, el propio artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la reforma en materia de derechos humanos, entre otras cosas, amplía el catálogo de los derechos humanos reconocidos para todas las personas incluyendo aquellos que se encuentran en los Tratados Internacionales de los que México forma parte, y señala que todas las autoridades están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de ahí que el debido proceso es un derecho humano, el cual toda autoridad del país debe garantizar su prevalencia en cualquier proceso legal incoado en contra de algún ciudadano, mismo que se consagra en los artículos 17 y 18 de la Constitución Federal, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), XVIII y XXVI de la Declaración Americana sobre Derechos del Hombre; 2, 3 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 6, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y que se define como el conjunto de formalidades esenciales que deben observarse en cualquier procedimiento legal, para asegurar o defender los derechos y libertades de toda persona, además, se refiere a los medios que toda persona tiene para hacer valer sus derechos.

Aunado a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14 párrafo segundo, 16 párrafo primero, 19 párrafo primero, 21 párrafo primero y 102 apartado A párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva implícitamente el principio de presunción de inocencia, el cual se contiene de modo expreso en los diversos artículos 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; de ahí que dichos preceptos deben interpretarse de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados la interpretación más favorable que permita una mejor impartición de justicia. Es así que uno de los principios rectores del derecho que debe ser aplicable en todos los procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado, es el de presunción de inocencia como derecho fundamental de toda persona, aplicable y reconocible a quienes pudieran estar sometidos a un procedimiento administrativo sancionador y, en consecuencia, soportar el poder correctivo del Estado, a través de autoridad competente. En ese sentido, el principio de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento administrativo sancionador—con matices o modulaciones, según el caso—debido a su naturaleza grave, por la calidad de inocente de la persona que debe reconocerse en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la autoridad, en atención al derecho al debido proceso.

En ese orden de ideas, resulta fundamental puntualizar que el Título Sexto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Título Cuarto de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, regulan tanto la información clasificada como establecen las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la información, en síntesis, tenemos en principio que toda la información que genere, posea o resguarden los sujetos obligados es de acceso público, mismo que únicamente

podrá limitarse por las razones y motivos expresamente señalados en la ley invocada; de igual manera, que la clasificación de la información se efectuará, entre otras causas, cuando se reciba una solicitud de información y lo requerido encuadre en alguno de los supuestos que la ley contempla para considerarla reservada; que para efectuar la clasificación, esta debe realizarse por conducto del órgano competente para ello, como lo es el Comité de Transparencia de cada sujeto obligado mediante un acuerdo que se le hará saber al solicitante, en el que se expongan los fundamentos y razonamientos legales por los que se estima que en su caso, debe clasificarse la información así como el período que comprenderá la reserva.

Ahora bien, en el caso se actualiza lo preceptuado por los artículos 113 fracciones IX, X y XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 68 fracciones V, VI y VII de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, las cuales establecen que la información será reservada y por lo tanto no puede difundirse cuando obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a servidores, ex servidores públicos o particulares vinculados con las faltas administrativas graves que en su caso se determinen como tales, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa, afecte los derechos del debido proceso y vulnere la conducción de los expedientes judiciales o los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado, ya que como se ha dejado apuntado en esta acta, los expedientes de investigación números ORFIS/II/IF/2020/024/2021 y ORFIS/SI/IR/2019/021/2021 contienen información de procesos no concluidos y acciones que aún se encuentran en investigación, aunado a que esta la Autoridad Investigadora se encuentra obligada en todo momento a garantizar el derecho al debido proceso de los ciudadanos que son sujetos a investigación, ya que en caso de que se concluya que derivado de las diligencias de investigación, existe responsabilidad administrativa imputable a los investigados, se emitirá el correspondiente Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y se turnará a la Autoridad Substanciadora a efecto de que inicie el procedimiento administrativo correspondiente, es así que de publicarse la multicitada información se violentaría el derecho al debido proceso que debe prevalecer en todo procedimiento incoado por cualquier autoridad en contra de algún ciudadano.

En efecto, las actuaciones administrativas contenidas en los mencionados expedientes de investigación se encuentran en trámite, es decir, la información integrada a la fecha sigue una valoración y análisis exhaustivo, el cual no es concluyente y, de ser el caso, podría variar el sentido del asunto. Incluso, podría solventarse el presunto daño patrimonial con lo que se emitirá un Acuerdo de Conclusión y Archivo, o por el contrario, según los datos que se sigan aportando se pudieran vincular a más servidores o ex servidores públicos, en conclusión, la información con la que actualmente cuenta la Autoridad Investigadora no es concluyente y no se ha dictado resolución administrativa, actualizándose las fracciones IX, X y XI del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como las fracciones V, VI y VII del artículo 68 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Aunado a lo anterior, se significa que en las investigaciones llevadas a cabo por la Autoridad Investigadora todas las actuaciones que de ahí emanan se integran al respectivo expediente de investigación, así como todos los elementos necesarios para conocer un hecho del cual se desprenda la actuación indebida de un servidor o ex servidor público, o bien de un particular, y como consecuencia se determine la comisión de faltas administrativas, por lo que de otorgar copia fiel de la contestación y solventación entregadas a este órgano de fiscalización para atender las observaciones FP-042/2019/022, FP-042/2019/023, FP-051/2020/012 y FP-051/2020/013 puede poner en riesgo las funciones que ejercen los servidores públicos encargados de la investigación durante el desarrollo de las diversas diligencias de investigación, además de que las mismas aún se encuentran en trámite.

En ese orden de ideas y como se ha dejado apuntado en líneas que anteceden, es que se considera que el daño que se ocasionaría al divulgar dicha información es mayor al que en su caso pudiera resentir el solicitante, ya que se revelarían técnicas de investigación utilizadas por la Unidad de Investigación, asimismo se violentaría el derecho al debido proceso que la Autoridad Investigadora

debe garantizar y preservar en favor de los investigados, el cual se encuentra tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que se concluye que la reserva de las informaciones contenidas en las mencionados expedientes debe prevalecer sobre el derecho de información accionado por el solicitante.

FUENTE DE INFORMACIÓN	
Unidad de Investigación	
PERIODO	
Tres años.	
INFORMACIÓN QUE ABARCA	
Documentos que conforman la contestación y solventación entregada al Órgano de Fiscalización Superior derivado de las observaciones a las cuentas públicas 2018 y 2020 del Instituto Tecnológico Superior de Perote, registradas de la siguiente manera: FP-042/2019/022, FP-042/2019/023, FP-051/2020/012 y FP-051/2020/013, respectivamente, que forman parte de las investigaciones a cargo de la Unidad de Investigación de este Órgano, identificadas con los números de expediente ORFIS/II/IF/2020/024/2021 y ORFIS/SI/IR/2019/021/2021.	
RESPONSABLE DEL RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN	
Titular de la Unidad de Investigación.	

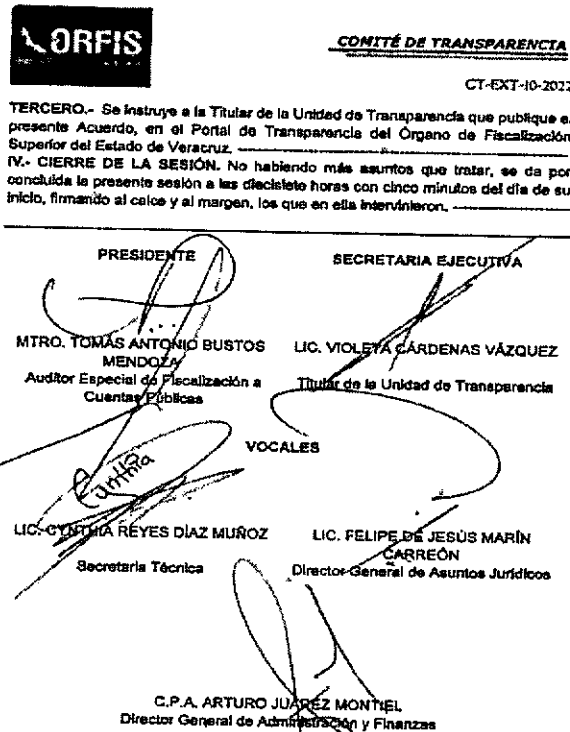
g) En razón de lo anteriormente fundado y motivado, se pone a consideración de los integrantes del Comité de Transparencia del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, la aprobación de la Clasificación de la Información en la Modalidad Reservada señalada con antelación.

RESULTANDO
Los integrantes del Comité manifiestan su aprobación por unanimidad, por lo que se emite el siguiente:

ACUERDO CT-25-03-2022/CIR/08

PRIMERO. Se confirma la aprobación de la Clasificación de la Información en modalidad Reservada referente a los documentos que conforman la contestación y solventación entregada al Órgano de Fiscalización Superior derivado de las observaciones a las cuentas públicas 2018 y 2020 del Instituto Tecnológico Superior de Perote, registradas de la siguiente manera: FP-042/2019/022, FP-042/2019/023, FP-051/2020/012 y FP-051/2020/013, respectivamente, que forman parte de las investigaciones a cargo de la Unidad de Investigación de este Órgano, identificadas con los números de expediente ORFIS/II/IF/2020/024/2021 y ORFIS/SI/IR/2019/021/2021, a efecto de atender la solicitud de información registrada con número de folio 300564100004222, del Índice de la Plataforma Nacional de Transparencia.

SEGUNDO. Se instruye a la Titular de la Unidad de Transparencia que notifique a la persona solicitante del presente Acuerdo.



A lo anterior, también adjunta el oficio número ORFIS-OF-UT-124-04-2022, firmado por la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, dirigido a la Titular de la Unidad de Investigación, por el cual le requiere se pronuncie respecto de la solicitud de información que motivó el presente recurso de revisión.

A su vez consta en el sumario el Memorándum UI/109/04/2022, que remite la Titular de la Unidad de Investigación a la Titular de la Unidad de Transparencia en respuesta a su requerimiento y en contestación al recurso de revisión que nos ocupa.

Documentales con valor probatorio pleno de conformidad con lo previsto en los artículos 174, 175, 177, 185, 186 y 187 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz, al referirse a documentos públicos expedidos por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y no existir prueba en contrario.

Las parte recurrente no compareció en el presente recurso de revisión.

Por lo anterior, el problema a resolver consiste en determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información del particular, en razón del agravio expresado.

▪ Estudio de los agravios.

En ese sentido, del análisis de las constancias que obran en autos, se advierte que el motivo de disenso planteado es **infundado** acorde a las razones que a continuación se indican.

Lo peticionado por la persona particular constituye información pública vinculada con obligaciones de transparencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 3, fracciones VII, XVI, XVIII; 4, 5 y 9, fracción VII, 19 fracción V, inciso e), de la Ley de la materia, que concibe con ese carácter a toda aquella que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen, resguarden o conserven por cualquier título o medio y se relacione con las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos otorguen al sujeto obligado.

Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz

...

Artículo 19. Además de lo señalado en el artículo 15 de la presente Ley, los órganos autónomos deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:

...

V. El Órgano de Fiscalización Superior del Estado:

...

e) Pliego de Observaciones y las observaciones solventadas;

...

Información solicitada que guarda relación con las atribuciones del sujeto obligado de generar, administrar, resguardar y/o poseer a través de las áreas competentes en términos de lo dispuesto en los artículos 5, fracciones IV, 26, 27, del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, el cual establece lo siguiente:

...

Artículo 5. Para el ejercicio de sus facultades y la atención de los asuntos de su competencia, el Órgano contará con las áreas administrativas siguientes:

...

IV. Unidad de Investigación;

...

Artículo 26. La Unidad de Investigación es el área administrativa del Órgano encargada de investigar los actos u omisiones que puedan implicar alguna irregularidad o conducta ilícita, o bien, la comisión de faltas administrativas por parte de las y los servidores públicos de los entes fiscalizables o de particulares, de los que conozca el Órgano derivado del ejercicio de la facultad de fiscalización superior o como resultado de sus revisiones, auditorías e investigaciones, en los términos establecidos en la Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 27. Corresponde a la o el titular de la Unidad de Investigación ejercer las facultades siguientes:

...

IV. Recibir e investigar las denuncias que le sean instruidas por la o el Auditor General, en términos de lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley;

V. Realizar investigaciones respecto de las conductas de las y los servidores públicos de los entes fiscalizables y de particulares, de los que conozca el Órgano derivado del ejercicio de la facultad de fiscalización superior o como resultado de sus revisiones, auditorías e investigaciones, que puedan constituir responsabilidades administrativas, así como de los actos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delitos, los cuales serán informados a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para los efectos procedentes;

VI. Previo acuerdo de la o el Auditor General, desahogar el Procedimiento de Investigación de las faltas graves cometidas por servidores públicos, que se desprendan de la Fiscalización Superior, en términos de las disposiciones aplicables en materia de responsabilidades administrativas;

VII. Instruir el procedimiento de investigación, para lo cual contará con las facultades que sean necesarias para el desahogo de las diligencias que se estimen pertinentes;

VIII. Determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas señalen como faltas administrativas, así como elaborar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa correspondiente;

IX. Remitir a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, los informes de Presunta Responsabilidad Administrativa derivados de los procedimientos de investigación realizados;

...

Q

Como se observa, la **Unidad de Investigación** es el área administrativa del Órgano encargada de investigar los actos u omisiones que puedan implicar alguna irregularidad o conducta ilícita, o bien, la comisión de faltas administrativas por parte de las y los servidores públicos de los entes fiscalizables o de particulares, de los que conozca el Órgano derivado del ejercicio de la facultad de fiscalización superior o como resultado de sus revisiones, auditorías e investigaciones, en los términos establecidos en la Ley y demás disposiciones aplicables.

En tales condiciones, se advierte que en el presente expediente la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, acreditó haber realizado la búsqueda de la información solicitada, y acompañó los elementos de convicción que así lo justifican, como lo establecen los artículos 132 y 134 fracciones II, III y VII, de la Ley 875 de Transparencia que señalan lo siguiente:

...
Artículo 132. Las Unidades de Transparencia serán las instancias administrativas de los sujetos obligados, encargadas de la recepción de las peticiones de información y de su trámite, conforme a esta Ley. En cada sujeto obligado se creará una Unidad de Transparencia, que dependerá directamente del titular.

...
Artículo 134. Las Unidades de Transparencia tendrán las atribuciones siguientes:
II. Recibir y tramitar, dentro del plazo establecido en esta Ley, las solicitudes de acceso a la información pública;
III. Entregar la información requerida, fundando y motivando su resolución en los términos de esta Ley;
VII. Realizar los trámites internos necesarios para localizar y entregar la información pública requerida;
...

Por lo que la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, al acompañar en sus respuestas la documentación con la cual acredita haber dado respuesta a los requerimientos solicitados por el ahora recurrente especialmente con la respuesta remitida por la Titular de la Unidad de Investigación, área competente que otorgó una respuesta en términos de lo establecido en los artículos 5, fracciones IV, 26, 27, del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz; en consecuencia cumple con sus obligaciones establecidas en los numerales citados de la Ley 875 de Transparencia.

Siendo ello acorde a lo sostenido por este Órgano Garante en el criterio número 8/2015¹, de rubro y texto siguiente:

...

ATRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DE ACCESO DE REALIZAR LOS TRÁMITES INTERNOS NECESARIOS PARA LOCALIZAR Y ENTREGAR LA INFORMACIÓN PÚBLICA REQUERIDA. DEBE ACREDITARSE. Para tener por cumplida la atribución de las unidades de acceso de realizar los trámites internos necesarios para localizar y entregar la información pública requerida, prevista en el artículo 29, fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz, es menester acompañar a la respuesta la documentación expedida por el área o áreas competentes para ello. [Subrayado nuestro]

...

¹ Consultable en el vínculo: <http://ivai.org.mx/XXII/2016/Extraordinarias/ACT-ODG-SE-16-01-06-2016.pdf>

Ahora bien, de las constancias procedimentales del expediente en que se actúa, se advierte que en el procedimiento de acceso, el sujeto obligado emitió respuesta por parte de la Unidad de Investigación, en la cual determinó la reserva de la información ya que los expedientes de los cuales solicita la información la parte recurrente, se encuentran en trámite de investigación, sin embargo no consta en el expediente que se haya llevado a cabo el procedimiento previsto en el artículo 146, de la Ley 875 de Transparencia que nos rige, el cual establece que cuando se niegue la información por encontrarse en la excepción de reserva prevista en la Ley, la Unidad de Transparencia deberá notificar al solicitante el acuerdo de clasificación emitido por el Comité, lo cual no aconteció.

No obstante en la sustanciación del presente recurso de revisión, la Titular de la Unidad de Transparencia, remitió el **Acta de la Décima Sesión Extraordinaria de fecha veinticinco de marzo de dos mil veintidós**, firmada por el Comité de Transparencia del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante la cual en el resolutivo primero, determinan confirmar la aprobación de la clasificación de la información en su modalidad de reservada, respecto de los documentos que conforman la contestación y solventación entregada al Órgano de Fiscalización Superior, derivado de las observaciones a las cuentas públicas 2019 y 2020 del Instituto Tecnológico Superior de Perote, registradas de la siguiente manera: FP-042/2019/22, FP-042/2019/023, FP-051/2020/012 y FP-051/2020/013, respectivamente, que forman parte de las investigaciones a cargo de la Unidad de Investigación, identificables con los números de expediente ORFIS/UI/IF2020/024/2021 y ORFIS/SI/IR2019/021/2021, a efecto de atender la solicitud de información que nos ocupa.

En el Acta de la Décima Sesión Extraordinaria de fecha veinticinco de marzo de dos mil veintidós, firmada por el Comité de Transparencia del sujeto obligado, remitida en la sustanciación del presente recurso de revisión, se acordó la clasificación de la información como reservada, señalando en dicha acta que la información solicitada constituye información reservada en términos de los artículos 100, 103, 106 fracción I y 113 fracciones IX, X y XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 60 fracción I y 68 fracciones V, VI y VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado de Veracruz, cuarto, quinto, séptimo fracción I, octavo, vigésimo octavo, vigésimo noveno y trigésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para elaboración de versiones públicas.

De igual modo y tomando en consideración que el artículo 70 de la Ley de Transparencia indica que para reservar información la autoridad debe demostrar: I. Que la divulgación de la misma representa un riesgo real; II. Que el riesgo de perjuicio supera el interés público de conocerla, y; III. Que la limitación se adecue al principio de proporcionalidad y represente el medio menos restrictivo disponible.

En dicha Acta de Comité, quedó establecido en la **prueba de daño** que:

-El riesgo real de dar a conocer lo solicitado, correspondía a que las investigaciones ORFIS/UI/IF2020/024/2021 y ORFIS/SI/IR2019/2021 no han concluido por parte de la Unidad de Investigación, por lo que podrían afectarse al intervenir elementos externos tales como exposición a medios de comunicación o a la intromisión de terceros que no forman parte de dichas investigaciones, aún y cuando no existe certeza de la vinculación de las personas presuntas en una falta administrativa por encontrarse en trámite.

-El riesgo demostrable de dar a conocer la información solicitada implica que se estarían difundiendo investigaciones no concluidas y acciones que aún se encuentran en curso de investigación y por lo mismo pueden contener datos inexactos, con lo cual existe la posibilidad de dañar la investigación en curso y el procedimiento mismo.

-El riesgo identificable implica que la divulgación de la información podría alterar los resultados de las actividades de seguimiento de las acciones emitidas con base en las diligencias de investigación desahogadas, poniendo a disposición del público datos sensibles que afectarían las tareas de revisión y evaluación de la conducta de las personas investigadas.

-Respecto de la ponderación menciona que el derecho de acceso a la información así como la garantía de su ejercicio no es absoluta y se encuentra sujeta a los casos de excepción que se actualizan en el presente supuesto, citando los cuerpos normativos aplicables al caso y concluyendo que el daño que se ocasionaría al divulgar la información solicitada es mayor al en que en su caso pudiera resentir el solicitante, ya que se revelarían las técnicas de investigación utilizadas por la Unidad de Investigación, y se violentaría el derecho al debido proceso que la autoridad Investigadora debe garantizar y preservar en favor de los investigados.

Aunado a lo anterior, la Titular de la Unidad de Investigación del sujeto obligado, precisó que en efecto, en la primera solicitud que realizó la parte recurrente, se puso a disposición la información requerida con el respectivo costo por los medios de reproducción de la misma, ello en atención al principio de buena fe y a efecto de cumplimentar el procedimiento de acceso a la información pública, toda vez que en aquél momento, se desconocía la existencia de la documentación solicitada y su contenido integral porque no estaban integradas a las investigaciones de responsabilidades administrativas números ORFIS/UI/IF2020/024/2021 y ORFIS/SI/IR2019/2021, significando que desconoce el porqué existieron errores bancarios que impidieron realizar el pago de las copias solicitadas, no obstante una vez concluida la investigación, se estará en condiciones de emitir un acuerdo de conclusión y archivo o un informe de presunta responsabilidad administrativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 100 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Así mismo, la Titular de la Unidad de Transparencia señaló que las contestaciones y solventaciones que se entregaron a este Órgano de Fiscalización para atender las observaciones FP-042/2019/022 y FP-042/2019/023 señaladas en el informe de la Cuenta Pública 2019 y las diversas FP-051/2020/012 y FP-051/2020/013 señaladas en el informe de la Cuenta Pública 2020 del Instituto Tecnológico Superior de Perote, forman parte de las investigaciones números ORFIS/UI/IF2020/024/2021 y ORFIS/SI/IR2019/021/2021, por presunto daño patrimonial que constituyen la probable comisión de faltas graves de conformidad con el Título Tercero Capítulos II, III y IV de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mismas que al momento en que se formuló la solicitud que nos ocupa se encuentran abiertas y que pueden determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones ante la citada Ley General.

Puntualizado lo anterior, resulta fundamental resaltar como menciona el sujeto obligado, que las autoridades se encuentran obligadas en todo momento a garantizar el derecho al debido proceso de los ciudadanos que son sujetos a investigación, el cual se encuentra tutelado en los artículos 1º tercer párrafo, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, resultando aplicable la Jurisprudencia Constitucional, perteneciente a la Décima Época en materia Constitucional y Común de rubro **DERECHO AL DEBIDO PROCESO**.

También se estima que hacer públicas actividades administrativas y sustantivas de la autoridad ministerial, podría afectar su desempeño operativo, que al ser del dominio público, pudieran ser consideradas por terceros como motivación para desacreditar a la mencionada autoridad y dificultar el cumplimiento de su función evaluadora del actuar de los servidores o ex servidores públicos, y en su caso, la persecución de los delitos que lleguen a configurarse, ya que como se ha descrito en líneas que anteceden, la copia fiel de las contestaciones y solventaciones que se entregaron al sujeto obligado para atender las observaciones FP-042/2019/022 y FP-042/2019/023 señaladas en el informe de la Cuenta Pública 2019 y las diversas FP-051/2020/012 y FP-051/2020/013 señaladas en el informe de la Cuenta Pública 2020 del Instituto Tecnológico Superior de Perote, **son datos de prueba que sirven de base para la correcta conducción de la investigación de presunta responsabilidad de los ciudadanos involucrados.**

Por tanto, es preciso considerar que, el texto vigente del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que en materia de derechos humanos, el orden jurídico mexicano tiene dos fuentes primordiales: los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución; y los derechos establecidos en Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano es parte y que se encuentren debidamente ratificados por el Senado de la República, normas que a estar elevadas a rango constitucional son consideradas como supremas obligando a todas las autoridades su aplicación y en los casos que se requiera, a su interpretación.

Luego, el derecho de acceso a la información, así como la garantía de su ejercicio, están regulados, en el segundo párrafo del artículo 6° de la Constitución Federal; en el ámbito internacional por el arábigo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; además el diverso artículo 8° Constitucional establece el derecho de petición, el cual implica la obligación de las autoridades de dictar a una solicitud de información realizada por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario; es así que los mencionados derechos se encuentran vinculados y relacionados en la medida que garantizan a los gobernados el derecho, no sólo a que se les dé respuesta a sus peticiones por escrito y en breve término, sino que se haga con la información completa, veraz y oportuna de que disponga o razonablemente deba disponer la autoridad, lo que constituye un derecho fundamental tanto de los individuos como de la sociedad.

Por otro lado, el propio artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la reforma en materia de derechos humanos, entre otras cosas, amplía su catálogo incluyendo aquellos que se encuentran en los Tratados Internacionales de los que México forma parte, y señala que todas las autoridades están obligadas a promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos, de ahí que al ser el debido proceso un derecho humano, debe ser garantizado por la autoridad para que en todo proceso legal incoado en contra de algún ciudadano éste prevalezca, tutela que se consagra en los artículos 17 y 18 de la Constitución Federal; 8, 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San Jose); XVIII y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 2, 3 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y que se define como el conjunto de formalidades esenciales que deben observarse en cualquier procedimiento legal, para asegurar o defender los derechos y libertades de toda persona.

Aunado a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14 párrafo segundo, 16 párrafo primero, 19 párrafo primero, 21 párrafo primero y 102 apartado A párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; deriva implícitamente el principio de presunción de inocencia; el cual se contiene de modo expreso en los diversos 8 numeral 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 14 numeral 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; de ahí que dichos preceptos deben interpretarse de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados la interpretación más favorable que permita una mejor impartición de justicia; es así que uno de los principios rectores del derecho que debe ser aplicable en todos los procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como finalidad de la facultad punitiva del Estado, es el de presunción de inocencia como derecho fundamental de toda persona, aplicable y reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a un procedimiento penal y, en consecuencia, soportar el poder correctivo del Estado, a través de autoridad competente.

[Handwritten signature]

En ese sentido, el principio de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento penal -con matices o modulaciones, según el caso- debido a su naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la persona que debe reconocérsele en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la autoridad, en atención precisamente al derecho al debido proceso

En ese orden de ideas, resulta fundamental establecer que el Título Sexto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Título Cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, regulan la información clasificada, asimismo establecen las disposiciones generales de su clasificación y desclasificación, en síntesis, tenemos en principio que toda la información que generen, posean o resguarden los sujetos obligados es de acceso público; el cual únicamente podrá limitarse por las razones y motivos expresamente señalados en las leyes invocadas, de igual manera establece que la clasificación de la información se efectuará, entre otras causas, cuando se reciba una solicitud de información y lo requerido encuadre en alguno de los supuestos que la ley contempla para considerarla reservada; procedimiento que debe realizarse por conducto del órgano competente para ello, como lo es el Comité de Transparencia de cada sujeto obligado, mediante un acuerdo que se le hará saber al solicitante, en el que se expongan los fundamentos y razonamientos legales por los que se estima que en el caso particular, debe clasificarse la información, así como el periodo que comprenderá la reserva.

Si bien el principio de máxima publicidad se encuentra establecido en los artículos 6, apartado A, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 4 de la Ley de Transparencia del Estado de Veracruz, normatividad que, en conjunto, señala que toda información generada, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y solo podrá ser reservada de manera temporal a través de un régimen definido de excepciones y por razones de interés público.

A su vez el artículo 58 de la Ley de Transparencia mandata que, para motivar la clasificación de la información, los sujetos obligados deben señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que los llevaron a concluir que el caso particular se ajusta a los supuestos invocados, aplicando en todo momento una prueba de daño y de interés público en donde se demuestre que el perjuicio de dar a conocer la información supera al beneficio de divulgarla y al interés de la población por acceder a ella. Por su parte el numeral 59 del mismo ordenamiento indica que la carga de la prueba para justificar la negativa de acceso a la información recae siempre sobre los sujetos obligados.

De manera que dentro de las excepciones contempladas por las Leyes de la materia se encuentran la posibilidad de restringir el acceso a información que obstruya la prevención o persecución de los delitos, afecte los derechos del debido proceso, y se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como

delitos, (fracciones IX, X y XI del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y fracciones V, VI y VII del artículo 68 de la Ley Estatal).

Al respecto, los Lineamientos para clasificar y desclasificar la Información así como para la elaboración de versiones públicas mandatan en su Lineamiento vigésimo octavo establece que podrá considerarse como información reservada, aquella que obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa correspondiente; para lo cual, se deberán acreditar los siguientes supuestos:

- I. La existencia de un procedimiento de responsabilidad administrativa en trámite, y
- II. Que la información se refiera a actuaciones, diligencias y constancias propias del procedimiento de responsabilidad.

Así mismo el Lineamiento vigésimo noveno, señala que podrá considerarse como información reservada, aquella que de divulgarse afecte el debido proceso al actualizarse los siguientes elementos:

- I. La existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite;
- II. Que el sujeto obligado sea parte en ese procedimiento;
- III. Que la información no sea conocida por la contraparte antes de la presentación de la misma en el proceso, y
- IV. Que con su divulgación se afecte la oportunidad de llevar a cabo alguna de las garantías del debido proceso.

Por último en el Lineamiento Trigésimo, señala que podrá considerarse como información reservada, aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, siempre y cuando se acrediten los siguientes elementos:

- I. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que se encuentre en trámite, y
- II. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento.

Para los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento seguido en forma de juicio a aquel formalmente administrativo, pero materialmente jurisdiccional; esto es, en el que concurren los siguientes elementos:

1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre partes contendientes, así como los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepare su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, y
2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

Con todo lo anterior, se estima que en el presente caso tal como lo precisó el sujeto obligado en el **Acta de la Décima Sesión Extraordinaria de fecha veinticinco**

de marzo de dos mil veintidós, se actualiza lo previsto por las fracciones V, VI y VII, del artículo 68 de la Ley de la materia las cuales establecen que la información será reservada y por lo tanto no puede difundirse cuando obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa; afecte los derechos del debido proceso; y vulnere la conducción de los expedientes judiciales o los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; ahora bien, como se ha dejado apuntado en líneas anteriores, la copia fiel de las contestaciones y solventaciones que se entregaron al sujeto obligado para atender las observaciones FP-042/2019/022 y FP-042/2019/023 señaladas en el informe de la Cuenta Pública 2019 y las diversas FP-051/2020/012 y FP-051/2020/013 señaladas en el informe de la Cuenta Pública 2020 del Instituto Tecnológico Superior de Perote, constituyen datos de prueba e indicios de la actuación de los ex servidores y servidores públicos, por lo que de revelarse se incrementaría la posibilidad de dañar la actuación de las autoridades ministeriales y el procedimiento mismo de investigación; aunado a que las citadas autoridades se encuentran obligadas en todo momento a garantizar el derecho al debido proceso de los ciudadanos que son sujetos a investigación, lo que cual sería violentado si derivado de las actuaciones del sujeto obligado se acreditara la responsabilidad imputable a los investigados, que derivaría en las sanciones respectivas.

Así mismo el sujeto obligado consideró que al darse a conocer la documentación requerida se estaría difundiendo información de procesos no concluidos y acciones que aún se encuentran en investigación y por lo mismo, podrían contener datos inexactos, en calidad de datos de prueba que fueron aportados al Órgano Autónomo, por lo que al publicitarse, se corre el riesgo de entorpecer la conducción de la investigación que realiza esa autoridad, contenida en una investigación que aún no ha sido determinada y podría provocar que las estrategias procesales que, en su caso, pudieran derivarse, fueran conocidas y la parte responsable pudiera implementar acciones y tácticas dilatorias u otras que pudieran provocar alguna convicción errónea en el investigador, además que la información contenida no es concluyente y la misma puede ser modificada en cualquier momento a la luz de las diligencias de investigación que en su caso sean desahogadas de manera posterior a la entrega de la información solicitada.

La divulgación de la información podría alterar los resultados de las actividades de seguimiento de las acciones emitidas, con base en las diligencias de investigación desahogadas, poniendo a disposición del público en general datos sensibles que afectarían las tareas de revisión y evaluación de la conducta de los ciudadanos investigados, generando de forma específica un estado de riesgo para que los servidores públicos cumplan con las disposiciones legales que regulan su actuación.

En ese orden y como se expuso por el Comité de Transparencia del sujeto obligado, es que se considera que el daño que se ocasionaría al divulgar la información solicitada, es mayor al que en su caso pudiera resentir el solicitante; ya que se revelarían datos de prueba aportados en las mismas, asimismo se violentaría el derecho al debido proceso que todas las autoridades deben garantizar y preservar en favor de los investigados, el cual se encuentra tutelado por la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales de los que México es parte y la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que se concluye que la reserva de la información contenida en el mencionado expediente debe permanecer sobre el derecho de acceso a la información incoado por el solicitante, de ahí que se valide la confirmación de reserva efectuada por el Comité de Transparencia del sujeto obligado contenida en el **Acta de la Décima Sesión Extraordinaria de fecha veinticinco de marzo de dos mil veintidós.**

En el caso, resulta evidente que el sujeto obligado siguió el procedimiento establecido por la Ley para la clasificación de la información, toda vez que el área competente expuso la motivación y fundamentación que, a su consideración, actualizó las causales de reserva antes precisadas, además de que se elaboró una **prueba de daño** y el Comité de Transparencia confirmó la determinación, motivos plasmados en el Acta de la Décima Sesión Extraordinaria de fecha veinticinco de marzo de dos mil veintidós que se consideran válidos para justificar la reserva de la información pues demuestran un nexo entre su divulgación y el peligro en el que se pondría el entorno al darla a conocer, de ahí que el sujeto obligado sí acreditó la reserva de la información por cuanto al contenido de las fracciones IX, X y XI del artículo 113 la Ley General de Transparencia, así como 68 fracciones V, VI y VII de la Ley del Estado de Veracruz, así mismo tomando en consideración lo expuesto, el sujeto obligado observó lo establecido en el artículo 143 de la Ley de Transparencia del Estado de Veracruz, garantizando el derecho de acceso de la particular.

Finalmente, en relación con el agravio relativo a la imposición de una sanción para la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, este órgano garante estima que no se actualiza causa de sanción alguna de las que establece el artículo 257, de la Ley 875 de Transparencia del Estado de Veracruz, máxime que la clasificación de información efectuada por el ente obligado cumplió las fracciones IX, X y XI del artículo 113 la Ley General de Transparencia, así como 68 fracciones V, VI y VII de la Ley del Estado de Veracruz, por lo que, se estima improcedente la aplicación de la sanción que indica la persona recurrente.

Con todo lo expuesto, este Órgano de Garante estima que la respuesta del sujeto obligado se encuentra ajustada a derecho, sin que se advierta de la misma en concatenación con el agravio expresado una vulneración al derecho de acceso de la parte recurrente.

CUARTO. Efectos del fallo. En consecuencia, al resultar **infundado** el agravio expuesto, lo procedente es **confirmar** la respuesta emitida por el sujeto obligado, con apoyo en el artículo 216, fracción II, de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por las razones expresadas en el presente fallo.

Por lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto resuelve al tenor de los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO. Se **confirma** la respuesta del sujeto obligado.

SEGUNDO. Se **informa** a la parte recurrente que la resolución pronunciada puede ser combatida por la vía ordinaria mediante el Recurso de Inconformidad, ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales dentro de los quince días hábiles siguientes a que surta efectos la notificación de la resolución; lo anterior de conformidad con el artículo 215, fracción VII de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 218, fracciones III y IV de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Notifíquese la presente resolución en términos de Ley y, en su oportunidad, archívese como asunto definitivamente concluido.

Así lo resolvieron por **unanimidad** de votos las personas integrantes del Pleno de este Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en términos del artículo 89 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ante el Secretario de Acuerdos, con quien actúan y da fe.




Naldy Patricia Rodríguez Lagunes
Comisionada Presidenta



David Agustín Jiménez Rojas
Comisionado



José Alfredo Corona Lizárraga
Comisionado



Alberto Arturo Santos León
Secretario de acuerdos